

Validez Probatoria de los Títulos Valores Electrónicos en Colombia

Monografía

Diego Alejandro Castañeda Valencia

Universidad Libre Seccional Pereira

Facultad De Derecho

Pereira

2022

Validez Probatoria de los Títulos Valores Electrónicos en Colombia

Monografía

Johns Álvaro Martínez Vargas

Asesor

Diego Alejandro Castañeda Valencia

Universidad Libre Seccional Pereira

Facultad De Derecho

Pereira

2022

Dedicatoria

En la vida existen pruebas que a veces nos llevan a desfallecer o a rendirnos antes de tiempo, pero con ellas llegan fuerzas que aportan y hacen que las cosas tengan un propósito permitiendo cumplirlas, no sólo por uno mismo sino por quien está apoyando todo el proceso. Así sucedió durante mi carrera, por ello en este pequeño apartado quiero dar gracias principalmente a Dios, quien nunca nos suelta de su mano y sitúa a las personas correctas en el momento preciso.

Dedico el logro que representa graduarme y hacer una tesis a mi madre *Luz Estella Valencia Gómez*, quien siempre, pese a cualquier dificultad, creyó en mí, en mi talento y me dio su apoyo incondicional sin importar por qué momento estaba pasando. También ofrezco este avance a mi familia que fue testigo de cada esfuerzo y me transmitía ánimo, a mis profesores porque fueron mi mayor inspiración, a mis compañeros quienes estuvieron conmigo durante todo este proceso y ahora comparten la dicha de ser mis colegas.

Tabla de contenido

	Pág.
Resumen.....	7
Abstract.....	7
Introducción	9
1. Planteamiento del Problema.....	12
2. Justificación	15
3. Objetivos de la investigación	18
3.1. Objetivo General	18
3.2. Objetivos Específicos.....	18
4. Marco Referencial.....	19
4.1. Marco Teórico	19
4.2. Marco Jurídico	25
4.3. Antecedentes de la Investigación.....	28
4.4. Marco Conceptual	30
4.5. Marco Contextual.....	33
4.5.1. La legislación internacional entorno a los títulos valores electrónicos y su interacción con los actos jurídicos en Colombia.....	33
5. Metodología.	40
5.1. Tipo de estudio.....	40
5.2 Métodos de investigación.	41

5.3. Forma de Investigación.....	41
5.3. Instrumentos de recolección de información.	41
5.4. Técnicas.	42
6. Capítulo I. Legislación aplicable a los títulos valores electrónicos en Colombia	43
7. Capítulo II. Caracterización de los títulos valores y títulos valores electrónicos en la dinámica comercial colombiana	52
7.1. Caracterización de los títulos valores.....	52
7.2. Títulos valores electrónicos en la dinámica comercial colombiana	56
8. Capítulo III. Depósitos centralizados de valores en Colombia	67
9. Reflexión Final.....	70
10. Conclusiones	72
11. Recomendaciones.....	73
Referencias.....	76

Lista de Figuras

	Pág.
Figura 1. <i>Usuarios de internet y compradores en línea en China y otros países</i>	38
Figura 2. <i>Evolución de la cartera de facturas electrónicas como títulos valores por cobrar en Colombia y otros países entre los años 2011 y 2015</i>	58
Figura 3. <i>Pagarés en custodia en el depósito centralizado de valores Deceval</i>	60
Figura 4. <i>Variación del mercado accionario en la Bolsa de Valores de Colombia</i>	61
Figura 5. <i>Evolución histórica de los CDT electrónicos como título valor por plazo medido en billones de pesos</i>	63
Figura 6. <i>Variación en la cotización de los bonos transados electrónicamente en Colombia</i>	65

Resumen

Los títulos valores electrónicos son un desafío en los mercados modernos y también sugieren un reto legal en la práctica de las actividades comerciales en Colombia. La promulgación de leyes con el propósito de brindar seguridad jurídica a las operaciones que involucran los títulos valores electrónicos ha abierto la puerta a interesantes discusiones sobre el marco regulatorio que debe regir este tipo de negociaciones.

La normativa existente en el país se torna insuficiente ante los rápidos avances en las tecnologías que se usan en estos movimientos y los esfuerzos de la Ley 527 de 1999 en materia de comercio electrónico se perciben limitados ante la magnitud del desarrollo de la era digital.

La seguridad en la legitimidad jurídica al amparo de leyes regidas por normativas sólidas en el país y que sean compatibles con los diferentes escenarios comerciales en el mundo hacen de fundamental importancia la legislación en este sentido y a su vez concede relevancia a una profunda reflexión sobre la validez probatoria de los títulos valores electrónicos en Colombia contenida en el presente documento.

Palabras Claves: Títulos valores electrónicos, comercio electrónico, validez probatoria, factura electrónica

Abstract

Electronic securities are a challenge in modern markets and suggest a legal challenge in the practice of commercial activities in Colombia. The enactment of laws with the purpose of providing legal certainty to operations involving electronic securities has opened the door to interesting discussions on the regulatory framework that should govern this type of negotiation.

The existing regulations in the country are insufficient due to the rapid advances in the technologies used in these movements and the efforts of Law 527 of 1999 on electronic commerce are perceived to be limited given the magnitude of the development of the digital age.

The security of legal legitimacy under the protection of laws governed by solid regulations in the country and that are compatible with the different commercial scenarios in the world make legislation in this sense of fundamental importance and in turn gives relevance to a deep reflection on the evidentiary validity of electronic securities in Colombia contained in this document.

Keywords: Electronic securities, electronic commerce, evidentiary validity, electronic invoice.

Introducción

El presente documento aborda la validez probatoria de los títulos valores electrónicos en Colombia a través del análisis de las leyes, decretos y disposiciones que regulan este aspecto en el país. De manera inicial se aborda el planteamiento del problema y justificación con su respectiva exposición considerando que están inmersos en el mundo del comercio electrónico y la era digital donde el avance en las tecnologías de la información y la comunicación, la sistematización de las operaciones de tipo financiero con conectividad global, el desarrollo de la red monetaria virtual, el intercambio electrónico de valores y la apertura de mercados a través del ciber espacio han generado una huella de trascendencia en la humanidad.

Teniendo en cuenta el orden temático se definen los objetivos de la investigación, la metodología aplicada en el documento y se abordan las teorías que en este sentido han aportado académicos y las sociedades en diferentes lugares del mundo donde han hecho aportes a lo largo de la historia, se consolida el marco referencial comprendido por los antecedentes de la investigación y los estudios realizados en este tema, marco jurídico que contiene las leyes, decretos y estructura legal que rige este aspecto en Colombia, el marco teórico que describe los aportes que han modelado nuevos esquemas en el ejercicio de las diferentes actividades de tipo mercantil y que han tejido complejas redes para dar soporte a dinámicas que se extienden a lo largo y ancho del planeta conectadas por el universo de la virtualidad. Sobresalen los aportes del marco conceptual con su aproximación a las definiciones fundamentales que hacen parte del documento para finalizar este compendio inicial con el marco contextual donde se hace una juiciosa revisión de la legislación internacional, en este tema, con respecto a los actos jurídicos emitidos en Colombia. Es precisamente en esa creciente actividad donde el sistema jurídico es

invocado desde las leyes y su reglamentación con el objetivo de dar seguridad legal a las operaciones realizadas vía internet.

El documento de investigación avanza hacia el Capítulo I, que contiene los resultados del planteamiento definido en la estructuración de los objetivos donde se evidencia la legislación aplicable a los títulos valores electrónicos en Colombia y se contempla la seguridad jurídica en el marco del conjunto jurídico disponible en este tema, abordando el cúmulo de leyes y jurisprudencia disponible en el país para dar respuesta a quienes intervienen en actividades comerciales mediante los múltiples ejercicios financieros en red y aquellos que involucran los títulos valores electrónicos.

El Capítulo II, realiza una caracterización de los títulos valores en concordancia con los títulos valores electrónicos vigentes en la dinámica comercial colombiana. Allí se resaltan los alcances logrados en materia de desarrollo cibernético y negocios a través de la red, y se deja de manifiesto que estos avances superan exponencialmente la velocidad con la que se legisla en los diferentes órganos que promulgan las leyes y regulan este tipo de ejercicios. También se visualiza que en muchos países existen los acuerdos de cooperación internacional en temas legales con el fin de hacer frente a las operaciones ilegales y fomentar, desde los términos jurídicos, la seguridad en los intercambios financieros y mercantiles.

En el Capítulo III, se abordan los aspectos concernientes a los Depósitos centralizados de valores como espacios de concentración y resguardo de valor. Se puede observar que Colombia no es ajena a las mareas que generan los movimientos bursátiles en el mundo y a los súbitos cambios en la legislación internacional, ese panorama traduce que es imperativo estar a la vanguardia en temas normativos que hagan frente al fraude, la evasión, el contrabando y demás prácticas que no se ajusten a la ley. La alineación de Colombia con los sistemas judiciales de otros países permite brindar mayor seguridad en las operaciones y aquellas que involucran los

títulos valores electrónicos y su salvaguarda virtual, además de proporcionar soporte legal acerca del marco regulatorio de las mismas y su alcance bajo el amparo jurídico.

El documento conduce hacia una consecuente reflexión final donde se deja claro el esfuerzo por ampliar los mecanismos de seguridad jurídica en Colombia que ha involucrado las ramas del poder público y contiene el compromiso tanto del legislador, así como el ejecutivo y judicial para conferir un marco regulatorio acorde con las necesidades actuales y el avance tecnológico. El sector privado, la academia y los diferentes órganos de control también se han sumado al llamado a contribuir con iniciativas jurídicas que consoliden una plataforma jurídica fuerte y consecuente con las diferentes instituciones de control en el mundo.

Las conclusiones que se encuentran en la parte final del documento de investigación colateral a las recomendaciones finales, permiten obtener un panorama concreto acerca de la validez probatoria de los títulos valores electrónicos en Colombia y se evidencia que con las leyes, los decretos y los actos que actualmente se encuentran en proceso de debate sobre los títulos valores electrónicos, se ha avanzado en el interés de otorgar una sólida seguridad jurídica a las actividades financieras y mercantiles en el ciber espacio, también se ha generado la impostergable tarea de abrir más escenarios de discusión y reflexión sobre la validez probatoria de los títulos valores electrónicos en Colombia.

1. Planteamiento del Problema

Los títulos valores electrónicos en Colombia hacen parte de la realidad mercantil del país y con el paso del tiempo las operaciones que se realizan en red con propósitos comerciales tienen mayores proyecciones. Las dificultades de salud pública presentadas en el mundo replantearon la magnitud de las actividades económicas ejercidas desde internet y motivaron tanto a organizaciones como a personas a involucrarse con nuevas maneras de acceso a recursos para lograr su solvencia económica. La necesidad de percibir ingresos desde atmósferas de confinamiento y restricciones en la interacción influyó drásticamente en el flujo del comercio electrónico, así como en la velocidad del movimiento de la información de manera virtual.

El mercado de valores, los títulos valores electrónicos, las actividades financieras y todas aquellas acciones que han involucrado intercambios de información a través del ciber espacio están representado todo un reto en el mundo bursátil pero también ha develado novedosos sistemas al alcance de la mano de cualquier persona. El uso de aplicaciones desde el teléfono móvil con múltiples accesos y el desarrollo de tecnologías con mayor cobertura y rapidez siguen planteando nuevos desafíos en la sociedad y en el emprendimiento de toda actividad económica.

El avance exponencial de los sistemas tecnológicos vinculados al mundo de los negocios, las crisis mundiales de diferente orden y la apertura mercantil al alcance de cualquier ciudadano han configurado para los títulos valores electrónicos mayores esfuerzos no solo en temas asociados a su disponibilidad en tiempo real, sino que ha dado fundamento a la urgente necesidad de fomentar la seguridad de las operaciones en términos jurídicos. La confianza legal de los intercambios realizados de manera virtual es una discusión en primer plano donde la

velocidad de respuesta en términos jurídicos es más lenta con respecto al ritmo de los negocios emergentes.

El legislador en Colombia, el gobierno nacional, el orden jurídico, los órganos de control y las diferentes agremiaciones con representación vienen realizando la misión de brindar un soporte jurídico sólido para garantizar que los títulos valores electrónicos en el país tengan la certeza del respaldo de las leyes emanadas desde el Congreso de la República y cuyas normativas se ajusten a los requerimientos internacionales para el intercambio de información, acceso a las operaciones mercantiles en derecho y amparados bajo el principio de equivalencia funcional, además de estar regidos por los criterios que cumplan con los requisitos legales para su reconocimiento y seguridad jurídica.

La ley 572 de 1999 en Colombia es una respuesta inicial al llamado de legislar con el propósito de regularizar prácticas mercantiles novedosas y al mismo tiempo inminentes en el desarrollo económico del país. Esta ley tiene sus raíces en lo expuesto por la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y cimenta las bases legales para la aplicación de los requisitos jurídicos de los mensajes de datos, comercio electrónico en materia de transporte de mercancías, firmas digitales, certificados y entidades de certificación. Las disposiciones posteriores en materia de orden jurídico que amparan las operaciones virtuales han marcado la hoja de ruta para que se expidan otras leyes, decretos y regulaciones que contienen normas que acogen las actividades mercantiles manera virtual, así como las pertinentes que desde el derecho contemplan las consecuentes aplicables a los títulos valores electrónicos.

En este sentido y considerando la importancia del tema de análisis del presente documento como son los títulos valores electrónicos en Colombia y la seguridad jurídica a través de leyes y normas que regulen su funcionamiento es oportuno indagar ¿cuál es el valor probatorio de los títulos valores electrónicos en Colombia a agosto de 2021?

2. Justificación

La relevancia social del presente documento está orientada a los diferentes actores en las diversas actividades económicas realizadas por medios electrónicos, así como al análisis de las leyes y las normas que reglamentan la práctica de las operaciones que involucran los títulos valores electrónicos en Colombia puesto que contempla no solo a quienes en el ejercicio del derecho propiamente dicho realizan la defensa o tutelan los intereses de sus representados, sino que también comprende a todos los ciudadanos, quienes desde sus labores comerciales y mercantiles, requieren ajustarse a los avances tecnológicos brindados por los sistemas que fomentan el intercambio mediante el flujo de capitales y negociaciones en todas las escalas, además de ofrecer un amplio panorama para el entendimiento de las disposiciones legales que rigen los mercados en el territorio nacional y otros países.

El presente estudio dentro de su alcance social permite fomentar el conocimiento a través del conjunto jurídico referente a los títulos valores electrónicos existente en Colombia y la utilidad de su aplicación en las esferas del cotidiano social, entendiendo que la aproximación a su conocimiento implica que los colectivos reflexionen acerca del fundamento teórico que lo compone y su relación con los sistemas sociales.

El valor teórico del presente documento abre espacios de estudio y análisis de las disposiciones que en términos legales existen en el sistema jurídico colombiano respecto a los títulos valores electrónicos, también nutre el vacío de referentes con un consolidado que contiene las disposiciones legales vigentes a la fecha y contribuye a una mejor comprensión e implementación de las regulaciones vigentes. En este sentido la discusión y promulgación de leyes desde el legislativo y su puesta en marcha bajo la vigilancia de los diferentes órganos de

control en el país se constituye en una práctica generadora de conocimiento como instrumento útil en la salvaguarda de los intereses de todos los actores partícipes en aquellas experiencias de tipo bursátil y en especial las que contengan los títulos valores electrónicos.

El derecho en su conceptualización, por su función normativa, ampara que el desconocimiento de los términos legales no exime de responsabilidad a aquellos que intervienen en procesos no acordes a las normas establecidas. De ahí la importancia de comprender que las prácticas a través de internet proporcionan el acceso a la consecución de todo tipo de bienes y servicios mediante un soporte digital que es transferido electrónicamente, y esto rompe con el esquema tradicional del documento físico de papel, en consecuencia, es fundamental entender el panorama de consideraciones legales que amparan este nuevo tejido reconociendo sus privilegios, pero también las responsabilidades jurídicas que contiene.

Es oportuno advertir que el valor teórico de los títulos valores electrónicos lleva implícita una amplia conveniencia desde sus fundamentos que sirve para contextualizar y entender las disposiciones que representan no solo la realidad de los negocios a través de la virtualidad, sino que también orientan a los diferentes actores en la adquisición de compromisos comerciales y su alcance, bajo el amparo de leyes que conduzcan a la certeza en las inversiones que se realizan y a la protección que brinda el Estado cuando se actúa siguiendo la línea de la ley y el legítimo derecho.

En lo que respecta a la utilidad metodológica del presente documento se sugiere un compendio sólido de las leyes, normas, decretos, resoluciones y proyectos de ley que tienen dentro de su naturaleza fundamentar el ejercicio a través de los títulos valores electrónicos en Colombia y concentrar su atención en la definición jurídica de esta práctica mercantil contenida en la extensión del comercio electrónico. Si bien el comercio ha alcanzado mayores estándares

de complejidad por su incursión en los términos del mundo electrónico, los títulos valores son el insumo esencial del presente escrito.

El presente documento se encuentra circunscrito dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que han sido trazados por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el año 2015 y que han sido proyectados por 15 años hasta alcanzarse en el año 2030. Dentro de los 17 objetivos propuestos se resalta la pertinencia del 8º objetivo que tiene como propósito promover el crecimiento económico que sea inclusivo y sostenible, además del fortalecimiento de aquellas formas de empleo y trabajo en condiciones de dignidad para todos los ciudadanos.

Es oportuno mencionar que dentro de las metas del objetivo relacionado se resalta la necesidad de fomentar las políticas que estén dirigidas al fortalecimiento de las diferentes actividades del sector productivo. La generación de actividades laborales dignas, las acciones orientadas a emprender en términos creativos e innovadores, la formalización a través de la legalización y fundamentado en las leyes existentes para la práctica de las actividades comerciales que contribuyan al crecimiento de los diferentes partícipes.

La formalización dentro del objetivo planteado está vinculada al conocimiento y cumplimiento de las disposiciones legales existentes en el ejercicio de las actividades económicas ejercidas dentro de la legalidad y reconocidas bajo el amparo del Estado. De esta manera el presente documento proporciona los elementos legales existentes en el compendio jurídico colombiano para que sean aprovechados por los diversos actores sociales en el ejercicio de sus actividades comerciales y estén sujetos a las reglamentaciones y las leyes vigentes contribuyendo de manera activa en la socialización de las normas que son sensibles de ser aplicadas en la creciente práctica comercial a través de medios como los títulos valores electrónicos.

3. Objetivos de la investigación

3.1. Objetivo General

Identificar el valor probatorio de los títulos valores electrónicos en la legislación colombiana a agosto del año 2021.

3.2. Objetivos Específicos

- ❖ Identificar la legislación aplicable a los títulos valores electrónicos en Colombia a agosto de 2021.
- ❖ Caracterizar los títulos valores y los títulos valores electrónicos en la dinámica comercial colombiana a agosto de 2021.
- ❖ Analizar los depósitos centralizados de valores como depositarios de los títulos valores electrónicos a agosto de 2021.

4. Marco Referencial

4.1. Marco Teórico

Los títulos valores remontan su origen en las legendarias actividades mercantiles ejercidas en oriente, oriente medio y antigua Europa donde las bases comerciales se cimentaron a través de formas de intercambio y compromisos entre las partes que en la actualidad pueden resultar arcaicas. Numerosas negociaciones no se encuentran documentadas y es sabido que las obligaciones y responsabilidades entre los contrayentes del acuerdo se sometían a regulaciones propias conforme a las costumbres de cada pueblo.

La Edad Media es más próspera en evidencias documentales acerca de las pruebas físicas usadas como compromiso de intercambio cuyo propósito era refrendar mediante escrito la responsabilidad adquirida comercialmente. Es comprensible que el compendio de registros fuera más amplio desde este periodo, puesto que la actividad mercantil contempló no solo la expansión de los clientes comerciales, sino las expediciones con el fin de conquistar territorios más allá de los espacios delimitados en los mapas de la época. Los nuevos soportes documentales con carácter legal que comprendía compromisos adquiridos en procesos de intercambio por negociaciones de buena fe, amparadas por las costumbres regidas en aquel tiempo es lo que hoy se le denomina “títulos valores” (Pena, 1992).

Los documentos equivalentes a los títulos valores en la edad media eran utilizados en las ferias y se hicieron absolutamente recursivos en las actividades comerciales de este tiempo dado el riesgo que suponía el traslado de la moneda de la época entre un lugar y otro. Los grupos de asaltantes se hicieron popularmente famosos por su capacidad para cometer sus ilícitos sin dejar

rastró y fue en ese momento donde hicieron su incursión los cambistas, quienes recibían las sumas de dinero y a cambio entregaban un documento que el acreedor trasladaba a otro sitio con el objetivo que el mandatario, socio o corresponsal del cambista, restituyera el dinero confiado (Rincón, 2008). El documento emitido por el agente cambista constaba de dos cláusulas, una de valor sobre la captación de dinero y otra “*distantia loci*” o de cambio trayecticio o compromiso de entregar el dinero en un lugar distinto a percibido. La utilización de documentos con valor y que estaban sujetos a las reglas de la época denotaba el carácter de un documento con una designación de valor y amparado por unas fórmulas sacramentales de naturaleza notarial que le otorgaban seguridad legal (Pavone, 1982).

Los títulos valores, las actividades mercantiles y de intercambio comercial han continuado su curso evolutivo a través del tiempo, los mecanismos de intercambio de valores se han hecho más complejos y también las coberturas mercantiles lo que dio lugar a los lineamientos del comercio internacional y los términos asociados a la globalización de mercados (Becerra, 2006). Esta apertura también habilitó la concertación de acuerdos entre países con el fin de unificar las reglas en temas asociados a las letras de cambio y pagaré que se planteó en La Haya en el año 1910 y fue aprobado en 1912, en este sentido la Conferencia de Ginebra en 1930 aprobó la Ley Uniforme de Ginebra que contiene acuerdos sobre la letra, cheque y pagaré (Díaz, 2010). Estos nuevos tratados consideraban no solo los parámetros para las nuevas reglas de intercambio, también fueron estructurando las bases legales con amparo jurídico internacional (Brunner, 1973).

Los títulos valores siguen teniendo un alto nivel de relevancia y a lo largo de su evolución los juristas especializados en temas comerciales han acompañado la estructuración de reglamentaciones que han contribuido a un mejor entendimiento entre las partes, pero también se han hecho perceptibles las complejidades técnicas de implica la articulación de leyes de

diferentes países y sus sistemas jurídicos. La definición contenida en el Código de Comercio de Colombia sobre los títulos valores y expresada mediante el Decreto 410 de 1971 en su artículo 619 enuncia que “los títulos-valores son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Pueden ser de contenido crediticio, corporativos o de participación y de tradición o representativos de mercancías” (Decreto 410, 1971).

Si bien el concepto de título valor expuesto manifiesta la necesidad de dar legitimidad a un documento que representa una cuantía y que en su calidad expresa que se encuentra bajo el amparo del derecho y los términos legales, también deja de manifiesto la naturaleza que desde la antigüedad se le aplicaba a las operaciones mercantiles con alto valor y la imperante necesidad de seguridad en los movimientos realizados no solo como una relación mercantil, sino también como derecho social (Arango, 2005).

Los títulos valores que se encuentran dentro del portafolio de documentos válidos y reconocidos por el Estado mediante el Código de Comercio, las instituciones públicas, establecimientos privados, organismos de control y cuentan con respaldo legal al amparo del derecho y la ley son: la letra de cambio, pagaré, cheque, factura, bono, bono de prenda, certificado de depósito a término (CDT), acciones, carta de porte y conocimiento de embarque (Paz, 2007).

Los organismos que regulan las actividades mercantiles y las instituciones financieras en Colombia han orientado sus labores consecuentes con los requerimientos del mercado y las posibilidades que otorga el legislador desde la perspectiva de nuevos productos que den respuesta a las peticiones de los diferentes actores mercantiles, en este sentido el mercado de valores en Colombia se ha visto enfrentada a una marcada evolución en la última década estrechamente ligada al desarrollo tecnológico aplicado a todas las esferas (García A., 2001).

Los progresos tecnológicos y los desarrollos alcanzados por los arquitectos de programas informáticos al servicio de los mercados de valores y sistemas financieros hacen que los títulos valores electrónicos formen parte de la nueva tendencia en el ciber espacio y configuren la desmaterialización de los soportes físicos tradicionalmente transados en los procedimientos bursátiles (Ruíz, 2007). La integración de las operaciones de valores con los avances tecnológicos se ha constituido en una expansión de las posibilidades de negocios en línea y ha abierto la puerta a la necesidad de generar e implementar regulaciones en el marco de ejercicios que brinden seguridad jurídica tanto para las personas naturales e instituciones involucradas como a los depósitos centralizados quienes adquieren la obligación legal de respetar lo definido en el título valor electrónico y conservar el derecho del titular (Botero, 2014).

Las definiciones existentes de los títulos valores electrónicos están sujetas al concepto desarrollado por los investigadores y autores en temas comerciales y todos los relacionados con el derecho mercantil (Bueno, 2014). Encontrar un consenso en un tema que evoluciona permanentemente y del que apenas se están haciendo las implementaciones iniciales no es tarea sencilla. Es probable que una de las aproximaciones teóricas al concepto de título valor electrónico se encuentre estrechamente relacionada a lo expuesto por el profesor José Alberto Gaitán:

Un título valor es un documento expícito, que contiene un mensaje claro y preciso y que, mediante la firma del emisor, quien lo traspasa de forma voluntariamente como indicador de haber adquirido un compromiso, detalla todas las especificaciones o formas específicas según su clase, concediéndole al portador de un derecho preciso que se admite legalmente y es de fácil transferencia en el mercado gracias a su vocación circulatoria (Gaitán, 2019).

La anterior alusión contiene elementos que están soportados en lo establecido por la legislación colombiana y compendia elementos que a la luz de la revolución tecnológica se

articulan de forma clave con el fin de dar trascendencia legal y seguridad a los portadores del título valor electrónico (Carvajal, 2008). El carácter electrónico del título valor le confiere una circunstancialidad inmaterial por su naturaleza virtual y se encuentra establecido en el espacio de las operaciones vía internet o ciber espacio, pero es portador de la vocación legal y jurídica que ha sido otorgada mediante la legislación y normas emitidas tanto por el legislador como por el gobierno nacional (Hincapié, 2014).

Las apreciaciones sobre la desmaterialización e inmaterialización de los títulos valores son amplias y desde el punto de vista jurídico están orientadas a la certeza legal de los portadores de los títulos valores electrónicos de manera intangible, pero con equivalencia comercial y mercantil conferida por las normas establecidas (Otálora, 2007). Desde el contexto institucional y en lo que concierne a los establecimientos encargados de ejercer el control también se han emitido conceptos valiosos en relación con los títulos valores electrónicos, “respecto de los títulos valores electrónicos debe señalarse que no es común la entrega material del mismo, de manera que se transferirá a partir de la utilización de uno o más mensajes de datos o registros electrónicos (Superintendencia Financiera, 2009).

Algunos puntos de vista acerca de la inmaterialización de los títulos valores electrónicos han tomado relevancia en los centros de debate y en las discusiones jurídicas acerca de su validez probatoria y el impacto de estos en las esferas del mundo de los negocios, además de destacar su relación directa con los desarrollos de los nuevos programas informáticos (Guzmán, 2019). Al respecto el investigador Erick Rincón afirma que:

La interpretación de la normatividad aplicable a los títulos valores electrónicos debe girar en torno a los principios del comercio electrónico, y no simplemente a la constatación de formalidades legales, que tienen un origen cartular (relación jurídica entre el emisor y el portador de un título). Y ello es posible si se tiene en cuenta que las tecnologías de la información se

tienen como disruptivas, es decir, que no siempre son armónicas con las legislaciones vigentes (Rincon, 2006).

La reflexión contiene bases importantes en la relación que existe entre las actividades electrónicas y el derecho, haciendo especial énfasis en que no hay una integralidad que sea referente de paridad entre el desarrollo tecnológico y las normas emitidas por el legislador en el momento del curso de las operaciones (Bernal, 2010). Las transformaciones que se viven en términos de información provista de manera digital fomentan grandes intercambios de información lo que demanda mayor agilidad, facilidad, capacidad de circulación, disminución de riesgos y cumplimiento de los requisitos legales y de seguridad, todo ello entendido desde la perspectiva de los beneficios de la era digital (Mayorga, 2019).

El uso de tecnologías informáticas ha contribuido a realizar múltiples transacciones bursátiles y acceder a los portafolios de las entidades financieras en todo el mundo, su funcionamiento es permanente y el ingreso se puede realizar a cualquier hora del día o la noche. El atributo que otorga la virtualidad y la desmaterialización en el manejo de este tipo de servicios ha facilitado la reducción de los costos por manejo documental físico y también se han replanteado funciones más competitivas. Las nuevas tecnologías han definido “el decrecimiento de los riesgos asociados con el envío de documentos de papel y el ahorro de tiempo y dinero” (Remolina, 2018)

La validez probatoria de los títulos valores electrónicos en Colombia se constituye en un ejercicio que denota la articulación entre la legislación y reconocimiento de las normas en las extensiones jurídicas requeridas, además de interactuar con las regulaciones internacionales establecidas en esta materia, pero también está estrechamente vinculada a la correspondencia con los avances tecnológicos para que, mediante una sólida representación legal, “se considere la reformulación de las teorías clásicas de los títulos valores” (Peña, 2011).

4.2. Marco Jurídico

El presente documento encuentra soporte jurídico en las leyes, decretos, resoluciones y proyectos de ley vigentes en la normativa colombiana y que ha sido cautelosamente vinculada a las reglamentaciones internacionales con el propósito de articular su funcionalidad y aplicación en el territorio colombiano y en concordancia con el amparo legal en territorios extranjeros.

En este sentido el Decreto 410 de 1971 dio origen al Código de Comercio de la República de Colombia el 27 de marzo de ese año sancionado por Misael Pastrana Borrero como presidente de la República y en cuyo compendio se mencionan los aspectos relacionados con las actividades comerciales y mercantiles que a partir de ese momento empezaron a contar con un acervo reglamentario enmarcadas en un orden regulatorio, también contempló mediante el Título III “De los Títulos Valores” el Artículo 619 que proporcionó la debida caracterización y el alcance de estos documentos dentro de la actividad comercial colombiana (Decreto 410, 1971).

La Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) promulgada el 12 de junio de 1996 por este organismo, emitió un conjunto de normas orientadas a brindar seguridad legal en las actividades comerciales y mercantiles que se encontraran dentro de los lineamientos de las actividades electrónicas y que en su orden fueran apropiadas por los países miembros como instrumentos válidos para la realización de operaciones de intercambio en esta modalidad con todo el respaldo de las disposiciones en cada país y la protección de este organismo internacional (CNUDMI, 2001).

Los esfuerzos por alinear las políticas de unificación de herramientas legales desde la perspectiva nacional e internacional en materia electrónica dieron origen a la Ley 527 de 1999 expedida el 21 de agosto de 1999 por el Congreso de la República de Colombia y en cuyas

disposiciones se caracterizan las definiciones de las actividades ejercidas digitalmente, además de reglamentar todo lo concerniente al uso de los mensajes de datos, determinación de las firmas digitales y acceso a los sistemas de certificación de aquellas operaciones que involucran intercambio comercial, información emitida digitalmente y reconocimiento a los mensajes de datos dentro del comercio electrónico, así como a las operaciones que contemplaran los títulos valores electrónicos (Ley 527, 1999).

En este orden el 08 de julio de 2005 el Congreso de la República de Colombia promulgó la Ley 964 de 2005 que determinó los criterios para el aprovechamiento de las inversiones realizadas mediante los valores que se encuentran reconocidos en la actividad comercial y aquellos que se realizan por medios digitales y no de forma física con soporte documental en papel escrito de manera tradicional. Esta Ley en su Artículo 12 distingue la “anotación en cuenta” como una expresión con sentido jurídico que involucra a las operaciones que requieren un registro y el reconocimiento del derecho del titular en ejercicio de una actividad por medio electrónico (Ley 964, 2005).

También es importante resaltar el avance que en materia jurídica representa la Ley 1231 promulgada el 17 de julio de 2008 por el Congreso de la República de Colombia y en el que invocando el Artículo 772 de Decreto 410 de 1971, más conocido como el Código de Comercio, se expresa la caracterización de la factura como título valor y vincula su circulación a los mecanismos electrónicos con reconocimiento jurídico y bajo la protección del Estado. Esta ley dicta las disposiciones para salvaguardar a los micro, pequeño y mediano empresarios, contando con la factura electrónica como título valor y un medio que les proporciona acceso a los beneficios del sistema financiero (Ley 1231, 2008).

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 2555 el 15 de julio de 2010 en el que se recogen las normas que involucran a los sectores financieros, asegurador y del mercado de valores. Este

Decreto concede funcionalidad a los Depósitos Centralizados de Valores como organismos dotados de todas las posibilidades funcionales y jurídicas para actuar en la custodia y administración de los títulos valores que son tranzados de manera electrónica y que mediante su inmaterialización continúan conservando su validez y se acogen de manera directa al concepto de “equivalencia funcional” contemplado en la jurisprudencia disponible (Decreto 2555, 2010).

Es oportuno relacionar lo expresado en el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 mediante el cual se realiza el proceso de reglamentación de los términos para la expedición y circulación de la factura electrónica como título valor. El Decreto en mención aborda los aspectos que involucran desde la creación hasta la negociación de los “títulos valores desmaterializados”, además de articula con los aspectos relacionados con la factura electrónica, mencionada en las normas tributarias, como instrumento de intercambio comercial y con reconocimiento como título valor electrónico (Decreto 2242, 2015).

Se hace pertinente mencionar lo dispuesto en la Ley 1943 del 28 de diciembre de 2018 donde el Congreso de la República encarga al Gobierno Nacional la implementación de todos los procesos de validación y reconocimiento de la factura electrónica como título valor electrónico dentro de los términos jurídicos y bajo los respectivos lineamientos de seguridad tecnológica. La ley donde se establecen los mecanismos de financiamiento en impuesto a las ventas e impuesto al consumo, en su carácter tributario, hace un llamado a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a actuar con respecto a los mecanismos de implementación y control de la factura electrónica como título valor (Ley 1943, 2018).

La Corte Constitucional en Colombia mediante la Sentencia SU-774/14 del 16 de octubre de 2014 emite una Sentencia de Unificación cuyo fundamento es el valor probatorio de los documentos. La Sentencia en mención fortalece el valor de la autenticidad de los documentos que reúnen las características establecidas en la normativa como instrumentos con certeza

jurídica para ser apreciados tanto en instancias públicas como privadas. La unicidad contempla la emisión de documentos de tipo digital o de naturaleza electrónica y por lo tanto, son susceptibles de tener valor comercial y mercantil (Sentencia SU-774/14, 2014).

El compendio de las disposiciones jurídicas disponibles en la República de Colombia en materia de títulos valores electrónicos son amplias y han sido emitidas por las diferentes instancias del poder, así como por las instituciones y organismos habilitados por la Constitución Nacional para tal fin. El presente aporte jurídico permite observar que a lo largo de la evolución legal desde el poder legislativo, el ejecutivo o el judicial se han realizado construcciones al derecho de los títulos valores electrónicos en diferentes sentidos y consecuentes con los contextos que plantean las transformaciones tecnológicas y los cambios en los sistemas mercantiles.

4.3. Antecedentes de la Investigación

Los títulos valores electrónicos vienen siendo motivo de análisis por diferentes académicos e investigadores que consideran la trascendencia de su aplicabilidad desde el ordenamiento jurídico colombiano. Si bien los sistemas informáticos vienen haciendo importantes aportes en este sentido, es pertinente reconocer que desde la seguridad en las operaciones el sistema jurídico aporta certeza en los intercambios comerciales y denota la necesidad de robustecer la legislación con fin de promover operaciones amparadas por el Estado y reguladas por los organismos de control.

En este sentido es oportuno referenciar el artículo “*Los títulos - valores electrónicos en el Ordenamiento Jurídico Colombiano*” publicado en la Revista Academia & Derecho y desarrollado por Pablo Andrés Mayorga Penna. El documento hace un análisis riguroso a partir

de la Ley 527 de 1999 que contempla la base jurídica al uso de los mensajes de datos y realiza reflexiones juiciosas en cuanto a otros alcances que contempla la ley y la entrada en vigencia de otras leyes y decretos como complemento a la estructura jurídica en el sistema legal colombiano. El documento va más allá de los temas conceptuales que rodean los títulos valores electrónicos y hace especial énfasis en el mecanismo de “anotación en cuenta” y las dificultades que, en términos de circulación, se presentan al momento de realizar una clasificación desde estas operaciones (Mayorga, 2019).

El estudio *“Los títulos valores electrónicos: una realidad tan palpable como inquietante en el ordenamiento jurídico colombiano”* desarrollado por Valeria Martínez Molano plantea los vacíos que en términos jurídicos se vislumbran al contemplar la ley propuesta por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). El documento reconoce la importancia de esta normativa emitida desde este organismo internacional y expone la necesidad de legislar en el Congreso de la República con el propósito de fortalecer las regulaciones que permitan hacer implementaciones que ofrezcan certeza jurídica en el tránsito de los títulos valores inmaterializados, además de consolidar los esfuerzos de todos los organismos de control en el desarrollo de herramientas que protejan de los delitos derivados de las prácticas electrónicas (Martínez, 2020).

La validez probatoria sigue siendo un tema de interés desde la academia y ello también remite a documentos que contienen intereses similares al del presente estudio. Tal es el caso del compendio *“Validez probatoria del título valor electrónico en Colombia”* que plantea el valor probatorio de estos títulos a través de los mensajes de datos como naturaleza básica de este tipo de títulos y su interacción con los procesos de desmaterialización o inmaterialización desde lo dispuesto en el ordenamiento jurídico colombiano. El documento hace un detallado análisis de la Ley 527 de 1999 desde su Artículo 28 y concentra su atención en el reconocimiento del título

conforme a lo definido en los criterios de confidencialidad, autenticidad e integridad (Gómez, 2016).

Dentro de los proyectos más prometedores en términos de títulos valores electrónicos es la implementación del sistema de registro RADIAN y la trazabilidad de las facturas electrónicas como instrumentos de acreditación financiera para las empresas en Colombia. Es por ello que el estudio titulado “*La factura electrónica como título – valor en el ordenamiento jurídico colombiano*” cobra relevancia por el interés creciente de la negociación de este tipo de títulos valores electrónicos. El estudio expone las posibilidades que se generan en la coexistencia de un ordenamiento jurídico sólido y en la implementación de un sistema que permite alcanzar mayores niveles de liquidez a las empresas que se encuentran en los sectores productivos en el territorio nacional, además del análisis del Decreto 1154 de 2020 expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como estructura regulatoria en lo concerniente a la factura electrónica como título valor (Jiménez, 2020).

Los títulos valores electrónicos han sido un tema de estudio desde diferentes ámbitos y su estrecha relación con el ordenamiento jurídico colombiano permite avanzar desde el análisis de las disposiciones iniciales a través de la emisión de mensajes de datos hasta el estudio de los títulos valores inmaterializados disponibles en el mercado de capitales y los Depósitos Centralizados de Valores. El sistema jurídico colombiano ha estructurado un tejido legal que cuenta con recursos del derecho que son amplios, pero que también están en constante formulación de nuevas respuestas a los desafíos que plantea el sistema en términos legales.

4.4. Marco Conceptual

Los títulos valores electrónicos hacen parte de las novedades configuradas en la escena del comercio digital y también en la revolución tecnológica que, desde lo mercantil, provee mejores condiciones de accesibilidad al intercambio de bienes y servicios a nivel mundial. Las facilidades que brinda la red de conexión virtual están estrechamente vinculadas a la aparición de nuevas maneras de comunicación y es vinculante con los nuevos términos dentro del mundo de los negocios y la promulgación de leyes que brindan nuevas seguridades a las actividades que se realizan en red. Los conceptos que se constituyen en significaciones que entran a hacer parte del acercamiento entre los diferentes actores es primordial en el desenlace de las nacientes formas de interrelación (Giraldo, 2007).

Los conceptos relacionados en el presente apartado están completamente sujetos al desarrollo tanto jurídico como documental del compendio estructural en esta investigación. A continuación, se definen los términos de mayor relevancia y se presentan sus conceptos amparados en los referentes reconocidos y en las normas eje de su reglamentación, así:

Títulos Valores: Según el Código de Comercio de Colombia los títulos valores son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Pueden ser de contenido crediticio, corporativos o de participación y de tradición o representativos de mercancías (Decreto 410, 1971).

Títulos Valores Electrónicos: Es un título valor desmaterializado, que bajo el principio de equivalencia funcional contiene el mismo valor que el emitido en físico, la misma estructura de derechos contenidos en el papel, pero en forma electrónica. Es la generación de un registro que es maniobrado electrónicamente sin necesidad de que repose o deba convertirse en un documento físico o análogo, dado que su existencia, circulación, garantía o ejecución se cumplirán efectuando una simple referencia o una clave técnica (Ley 527, 1999). En lo que

corresponde a la desmaterialización, se garantiza la misma estructura de derechos contenidos en el papel, pero en un mensaje de datos (Ley 964, 2005).

Validez Probatoria: Una de las cuestiones en la fundamentación de la valoración probatoria se centra en determinar la autenticidad de los documentos. Este concepto resulta absolutamente relevante en tanto en ocasiones, debido a su consecuencia valorativa, se confunde con el de originalidad. Por lo tanto, existe la posibilidad de que un documento a pesar de ser original carezca de autenticidad. Un documento auténtico es aquel en el que existe total certeza en relación con la persona que lo elaboró, suscribió o firmó. Se ha establecido que “la autenticidad es un requisito que debe estar cumplido para que el documento pueda ser apreciado y valorado por el juez en lo que intrínsecamente contenga” (Sentencia SU-774/14, 2014).

Comercio Electrónico: Abarca las cuestiones suscitadas por toda relación de índole comercial, sea o no contractual, estructurada a partir de la utilización de uno o más mensajes de datos o de cualquier otro medio similar. Las relaciones de índole comercial comprenden, sin limitarse a ellas, las siguientes operaciones: toda operación comercial de suministro o intercambio de bienes o servicios; todo acuerdo de distribución; toda operación de representación o mandato comercial; todo tipo de operaciones financieras, bursátiles y de seguros; de construcción de obras; de consultoría; de ingeniería; de concesión de licencias; todo acuerdo de concesión o explotación de un servicio público; de empresa conjunta y otras formas de cooperación industrial o comercial; de transporte de mercancías o de pasajeros por vía aérea, marítima y férrea, o por carretera (Artículo 2 Ley 527, 1999).

Factura Electrónica: Es el documento que soporta transacciones de venta de bienes y/o servicios, que para efectos fiscales debe ser expedida, entregada, aceptada y conservada por y en medios y formatos electrónicos, a través de un proceso de facturación que utilice procedimientos y tecnología de información, en forma directa o a través de terceros, que garantice su

autenticidad e integridad desde su expedición y durante todo el tiempo de su conservación, de conformidad con lo establecido en este decreto, incluidos los documentos que la afectan como son las notas crédito (Decreto 1929, 2007).

Firma Digital: Se entenderá como un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que, utilizando un procedimiento matemático conocido, vinculado a la clave del iniciador y al texto del mensaje permite determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la transformación (Artículo2, 1999)

4.5. Marco Contextual

4.5.1. La legislación internacional entorno a los títulos valores electrónicos y su interacción con los actos jurídicos en Colombia

Los títulos valores electrónicos hacen parte de la realidad comercial, financiera y mercantil de los actores de intercambio de bienes y servicios en Colombia, pero también están estrechamente ligados a las dinámicas jurídicas que amparan este tipo de operaciones en la esfera internacional. La Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas ha inspirado la promulgación de leyes, decretos y normas con carácter regulatorio en países de todos los continentes y ha trazado los lineamientos para la unificación de criterios en materia de interacción comercial con seguridad jurídica y al amparo de los Estados.

Si bien cada país advierte por la defensa jurídica de sus propias fronteras, también es acertado contemplar que la globalización y las actividades mercantiles a través de los sistemas tecnológicos que involucran programas informáticos se han convertido en un reto constante tanto para los desarrolladores de tecnologías en todo el mundo como para los legisladores desde su

facultad para promover, discutir y promulgar normas que sean compatibles en los diferentes territorios. Los títulos valores electrónicos en su propiedad dinámica dentro del comercio electrónico contiene panoramas que son sensibles de ser contemplados a través de la óptica de las principales legislaciones al rededor del mundo, genera aproximaciones al aporte al universo de los negocios en la era digital y permite profundizar en su interacción con las leyes promulgadas por el legislador en Colombia.

La Unión Europea Mediante la Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 13 de diciembre de 1999 estableció una reglamentación común que aborda las operaciones que usan los mecanismos tecnológicos y las redes informáticas para dar soporte legal y jurídico en toda la comunidad que usan las nuevas tecnologías y en consecuencia la firma electrónica. Esta Directiva configuró un marco jurídico dirigido a todos los integrantes de la comunidad europea para la firma electrónica y el reconocimiento de los proveedores de servicios de certificación. “La Directiva 1999/93/CE facilita la utilización de la firma electrónica y contribuye a su reconocimiento jurídico en todos los países de la Unión Europea (UE)” (García J. , 2008).

La Directiva 1999/93/CE establece los lineamientos jurídicos aplicables al reconocimiento de firmas electrónicas en las operaciones que también incluyen las comerciales, mercantiles, financieras y bursátiles, además establecer una regulación objetiva dirigida a los proveedores de servicios de certificación con el propósito de garantizar el reconocimiento transfronterizo de las firmas electrónicas y las normas generales en temas de responsabilidad que fomenten la confianza entre los consumidores. Este avance fortalece la firma electrónica concediéndole validez en todos los procesos que la incluyan, “una firma electrónica no puede ser rechazada jurídicamente como prueba en procedimientos judiciales” (Directiva 1999/93/CE, 1999).

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea emitió el Reglamento (UE) No 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo del 23 de julio de 2014 por la que se derogó la Directiva 1999/93/CE al considerar que esta ofrecía un marco regulatorio que se refería solo a las firmas electrónicas sin conceder la posibilidad de ofrecer un marco legal global transfronterizo e intersectorial que garantizara transacciones electrónicas seguras, confiables y de fácil uso. El Reglamento 910/2014 (UE) es más amplio en su alcance y proporciona mayores recursos legales puesto que “establece un marco jurídico para las firmas electrónicas, los sellos electrónicos, los sellos de tiempo electrónicos, los documentos electrónicos, los servicios de entrega electrónica certificada y los servicios de certificados para la autenticación de sitios web” (Reglamento (UE) No 910/2014, 2014).

En lo que respecta a Estados Unidos se ha implementado *The Uniform Electronic Transactions Act of 1999* (Ley Uniforme de Transacciones Electrónicas de 1999) o también conocida como UETA por sus iniciales en inglés. Esta ley ha sido promovida por la *National Conference of Commissioners on Uniform State Laws* (Conferencia Nacional de Comisionados sobre Leyes Estatales Uniformes), su promulgación depende de la aprobación de los legisladores de cada Estado, es una ley que instaura el marco legal para las transacciones electrónicas fundamentada en tres principios fundamentales: i) La mayoría de las disposiciones estatales se pueden reemplazar con un archivo electrónico, ii) Las disposiciones estatales pueden ser reemplazadas con una firma electrónica, iii) Las partes implicadas podrán acordar una firma electrónica para efectuar una transacción (UETA, 1999).

Estados Unidos también cuenta con *The Electronic Signature in Global and National Commerce Act of 2000* (Ley de Firma Electrónica en el Comercio Global y Nacional), fue aprobada en el año 2000 a nivel federal. Esta ley reconoce validez a todos los actos jurídicos efectuados por medios electrónicos, además tiene un mayor alcance en materia de seguridad

jurídica y apoyo legal a las transacciones por internet, no solo limita su influencia a las firmas electrónicas que conceden autenticidad a los documentos electrónicos, también se permite el almacenamiento de documentos digitales y abrió la puerta a una nueva era de negocios digitales brindando la posibilidad de firmar contratos legalmente reconocidos desde cualquier lugar garantizando su seguridad legal y reduciendo los costos de las transacciones (ESIGN, 2000).

La legislación en Perú promulgó a través del Congreso de la República la Ley No 27287 del 6 de junio de 2000 denominada como “Ley de Títulos Valores”. Esta ley introdujo en el sistema peruano mecanismos de transacción modernos y concedió mayor capacidad de análisis y respuesta a las operaciones de crédito ofrecidas por las entidades financieras. La Ley de Títulos Valores peruana hace alusión a los títulos valores materializados y desmaterializados, entendidos como los títulos tradicionales y los que se sujetan a las novedades frente al sistema anterior. El artículo 6º de esta ley dio paso al uso de la firma electrónica para la “emisión, aceptación, garantía o transferencia de los títulos valores aplicando el principio de equivalencia con respecto a los títulos valores firmados de manera física” (Ley N° 27287, 2000).

En lo que respecta a Brasil el Decreto 10.271/2020 adopta normas de protección al consumidor en las operaciones de comercio electrónico fundamentado en la Resolución 37/2019 del Mercosur. El decreto se centra en las actividades electrónicas facilitando el intercambio entre Brasil y otros países concediendo medidas legales de protección a los consumidores. Este decreto está articulado con las leyes y regulaciones que se encuentran en aplicación como son el Marco Civil de Internet, la Ley General para la Protección de Datos Personales (LGPD) y el Código de Protección al Consumidor (CDC). Dentro de los términos asociados al decreto se encuentran los correspondientes a las cláusulas y condiciones de la garantía legal y contractual del producto o servicio, así como proteger todas operaciones de valor realizadas de manera electrónica (Decreto N° 10.271, 2020).

Chile mediante la Ley 19.799 de 2002 promulgó a través del Congreso Nacional su legislación sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de firma. En términos legales la disposición establece que los actos y contratos celebrados por personas naturales o jurídicas y que sean suscritos a través de firma electrónica, serán reconocidos y válidos de igual manera que los efectuados por escrito y en soporte físico de papel, abordando el principio de “equivalencia funcional” con respecto a los realizados por medios tecnológicos (Ley 19.799, 2002). Chile ha implementado un eficiente sistema de registro de facturas electrónicas con un sistema de asiento centralizado que establece la posibilidad que existan las facturas electrónicas y se proceda a su cesión, este avance se dio en la ley que cedió recursos al Fondo de Desarrollo de la Región de Magallanes (Ley 20.219, 2007).

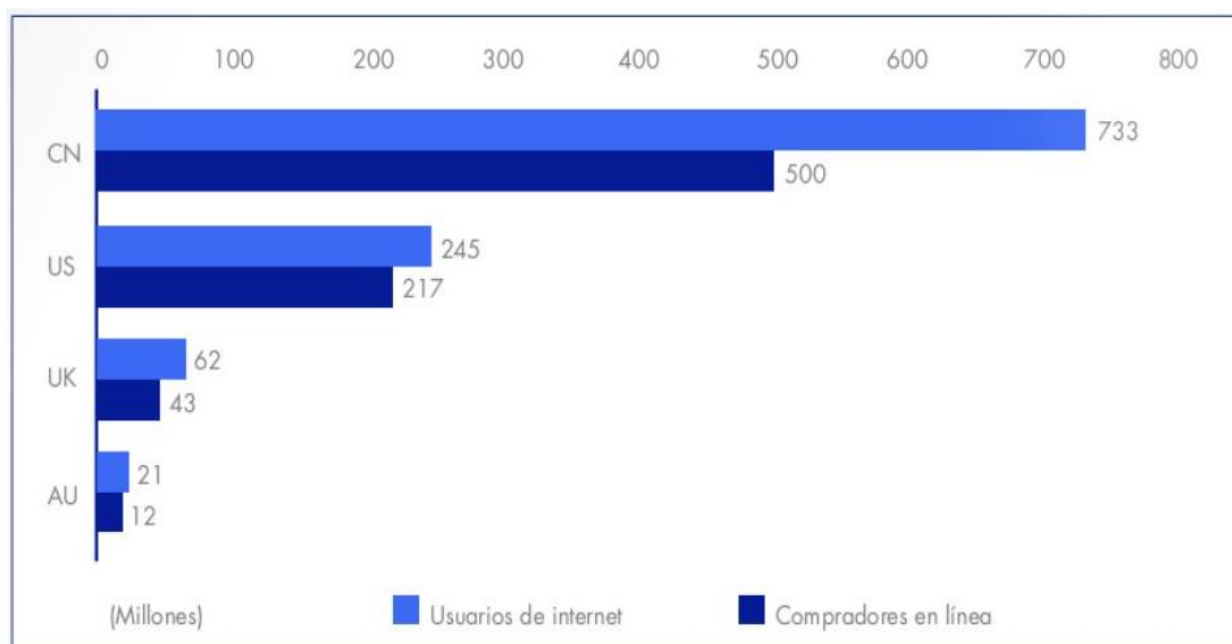
Argentina sancionó la Ley 25506 de 2001 o Ley de Firma Digital que entró en vigor en el año 2007, como otras regulaciones de distintos países la norma contempló el uso de la firma digital para el sector público y las empresas privadas de recursos humanos, mediante la Decisión Administrativa 927/2014 se amplió el uso de la firma digital a los diferentes conjuntos del sector privado. La ley también fue un avance en cuanto al reconocimiento de validez de los títulos valores electrónicos y desde la perspectiva de las actividades comerciales abrió la puerta a la reglamentación del uso del internet. En ese sentido el Código Civil argentino ha determinado que, para que la firma digital sea absolutamente válida, las partes interesadas en llevar a cabo el proceso firmante deberán establecer un acuerdo que será legalmente vinculante (Ley 25.506, 2001).

China desde el lado asiático es poseedor de una robusta normativa en temas asociados a los títulos valores electrónicos y operaciones asociadas al *e-commerce* o comercio electrónico. La complejidad del sistema mercantil y comercial chino está soportada en brindar seguridad jurídica y legal a los operadores con leyes y reglamentaciones promovidas por el gobierno y

organismos vinculados a este, en procura de otorgar certeza en las multimillonarias inversiones por temas comerciales y mercantiles que se realizan allí. Las transacciones que representaron ingresos en línea durante el año 2019 estuvieron alrededor de los USD862 mil millones de dólares y en el año 2020 las operaciones que involucraron valores electrónicos transfronterizos tuvieron un alcance de USD164 mil millones de dólares según el informe de Procolombia. También es importante resaltar que en 1997 los usuarios de internet en China eran 620.000 lo que representaba un 0.05% de la población, en el año 2020 los usuarios se ubicaron aproximadamente en 802 millones, más que los de Estados Unidos e India juntas. Además, en el año 2015 China sobrepasó a Estados Unidos como el mayor mercado de compras y transacciones que incluyeron títulos valores y operaciones comerciales de manera electrónica (PROCOLOMBIA, 2020).

Figura 1.

Usuarios de internet y compradores en línea en China y otros países



Nota. La figura muestra las cifras de usuarios de internet en China y sus compradores en comparación con otras economías del mundo en el año 2018. Fuente: ITU Ericsson Invesp, Wearesocial; Frost & Sullivan (2019). Obtenido de: Procolombia. E-commerce en China (2020)

Las normas en China no solo han estado en constante replanteamiento en aras de ofrecer un portafolio más amplio de servicios en línea y facilidad en las transacciones comerciales que involucran valores y títulos, también realiza esfuerzos enormes con el fin de hacer frente al fraude, evasión impositiva, los crímenes vía internet, el lavado de activos, entre otros. Algunas de las disposiciones legales en China abordan reglamentaciones como las del 12° Plan Quinquenal para el Desarrollo del *e-commerce* (2011-2015), en 2004 se inició la implementación de las Medidas para la Administración del Sector Comercial de Inversión Extranjera (*FICE-Foreign-invested commercial enterprise*) acerca de negocios tipo retail online. En 2010 el Ministerio de Comercio de China (*MOFCOM-China's Ministry of Commerce*) emitió la Circular sobre Varias Cuestiones Relativas a la Aprobación y Administración de las Inversiones Extranjeras en Ventas Online y Máquinas de Venta Automáticas (Shangzizi [2010] No. 272, “Circular Ventas Online”), además la Ley de Firma Electrónica se lanzó en 2004 por el Comité Permanente de la NPC, que entró en vigor en 2005 y concedió validez probatoria a los documentos electrónicos mediante la equivalencia con el documento de papel (China Briefing, 2013).

5. Metodología.

En el presente acápite se expondrá la metodología trabajada durante la presente investigación, partiendo como primicia que corresponde a una investigación enfocada hacia una monografía, la documentación frente a los títulos valores electrónicos da aportes significativos frente a la investigación, este apartado tendrá la siguiente estructura: en primera instancia se propondrá el tipo estudio que se tuvo en cuenta frente a esta monografía; en segunda instancia, el método de investigación que se utilizó; en tercera medida ,los instrumentos que posibilitaron la recolección de los datos o la forma como se obtuvo la documentación expuesta en la presente investigación y finalizando con la técnica usada dentro del mismo proyecto.

5.1. Tipo de estudio.

La presente investigación parte de ser una monografía cualitativa enfocada en explorar como monografía los autores correspondientes a los aportes significativos de los títulos valores electrónicos. Por lo tanto, se evidencia la importancia de explorar sobre los títulos valores electrónicos, en este tema ha sido muy poco tratado dentro del ámbito probatorio, lo que se evidencia con la presente monografía.

Asimismo, esta propuesta de investigación tiene un componente de tipo descriptivo, ya que como lo expone Hernández, Fernández, & Baptista (2010), “Busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno” (Pág. 80)

5.2 Métodos de investigación.

La presente investigación se comprende desde una metodología cualitativa como bien se mencionó anteriormente debido a que dicha metodología se centra en los aspectos no medibles ni cuantificables, es decir, se centró en una descripción sobre el marco normativo como el Código de Comercio, jurisprudencia de la Corte Constitucional, leyes, decretos, resoluciones y los autores que aportaron de manera significativa a los títulos valores electrónicos para determinar si se encuentra reglamentado o no para cada caso en concreto frente a los título valores.

5.3. Forma de Investigación

La forma de investigación es aplicada, ya que busca una correlación entre el derecho con otras especialidades del conocimiento. Lo expuesto precedentemente, se sustenta en que los títulos valores electrónicos se han convertido en un reto para los mercados modernos, y también sugieren un reto legal en la práctica de las actividades comerciales como se expone en el presente trabajo, que se pretende explicar y es el objetivo principal de esta investigación.

Por último, se propone una metodología histórica y lógica a partir del por qué estudiar dicho fenómeno desde su estado más puro y de forma generalizada, junto con la trayectoria histórica del objeto de estudio que es el de los títulos valores electrónicos en el ámbito probatorio.

5.3. Instrumentos de recolección de información.

Teniendo en cuenta que la presente investigación se presentó como una monografía, el instrumento seleccionado para ello fueron las revisiones bibliográficas de fuentes primarias y secundarias de autores que hacen referencia al fenómeno a investigar.

5.4. Técnicas.

Si bien el instrumento es la revisión bibliográfica del fenómeno de investigación, la técnica de ello se enfoca en el análisis de contenido de los textos encontrados, desde la constitución, leyes, decretos, resoluciones, jurisprudencia hasta autores doctrinarios que hacen alusión a las categorías de la presente investigación.

6. Capítulo I.

Legislación aplicable a los títulos valores electrónicos en Colombia

Los títulos valores electrónicos tienen su antecedente jurídico en las leyes que se han promulgado en virtud del comercio electrónico y en las normas que para efectos de las prácticas vía internet han publicado el gobierno nacional y los organismos facultados para tal fin. El derecho está enmarcado dentro de términos regulatorios que tienen como propósito ofrecer la certeza jurídica a los diversos actores y fomentar espacios de equilibrio y seguridad legal en los nuevos contextos mercantiles (Vega, 2014).

La legislación ha planteado leyes que contienen parámetros de comportamiento respecto al proceder en escenarios tradicionalmente concebidos como espacios de convivencia e interacción, las tecnologías de la información y la comunicación han planteado el crecimiento de prácticas virtuales que requieren estar contempladas dentro del amparo del acervo legal y bajo la salvaguarda del Estado (Trujillo, 2015). Considerando atmósferas que conviven en realidades que son compatibles y donde la regulación absoluta no es posible, entonces se señala que el derecho está dirigido a regular actos con “trascendencia jurídica”, lo que dentro de la teoría pura del derecho de Kelsen fue planteado como la “significación jurídica” (Kelsen, 1960).

Colombia mediante el Decreto 410 de 1971 expidió el Código de Comercio en cuyo Título III “De Los Títulos Valores” Artículo 619 aborda lo correspondiente a estos documentos. Desde el Congreso de la República se contempló la “certeza del derecho” y la seguridad de proceder con las acciones correspondientes en caso de incumplimiento en su ejecución. En este sentido y como un avance de relevancia jurídica fue conceder el trato de bienes mercantiles y no

solo el de una obligación a la espera de cumplimiento o un documento asociado solamente al derecho personal (Testa, 1996).

Los títulos valores dentro del Código de Comercio desde el Artículo 619 contienen su definición, clasificación, validez, requisitos, derechos, eficacia, obligatoriedad, consecuencias por afectaciones, prohibiciones, suscripción, garantía, emisión, transferencia y proporciona el horizonte de su alcance en términos legales al definir que “pueden ser de contenido crediticio, corporativos o de participación y de tradición o representativos de mercancías” (Artículo 619, 1971).

En este sentido el 12 de junio de 1996 se hizo la adopción de la Ley modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) donde se dispone de un conjunto de reglas con aceptación internacional encaminadas a facilitar el comercio por medios electrónicos. La Ley modelo supone un acercamiento y un camino a seguir en cuanto a la unificación de los términos legales con el propósito de minimizar los obstáculos jurídicos equiparando el manejo que habitualmente se le concede al acuerdo sobre el papel y al mismo realizado de manera electrónica (Suescún, 2003).

La Ley modelo de comercio electrónico ampara el principio de “equivalencia funcional” en el que de manera colateral se puede afirmar que todos aquellos documentos electrónicos que se ajusten conforme a los criterios de escritura, firma y autenticidad, además de los correspondientes requisitos de cada título, pueden ser “considerados títulos valores electrónicos” (Stodeur, 2011). La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional ha trazado los lineamientos, mediante distintos comunicados, acerca de la necesidad de fortalecer jurídicamente las transacciones realizadas electrónicamente correspondiente con los criterios de seguridad técnica como lo expresa en su finalidad:

La Ley Modelo sobre las Firmas Electrónicas tiene por objeto posibilitar y facilitar la utilización de las firmas electrónicas estableciendo criterios de fiabilidad técnica para la equivalencia entre las firmas electrónicas y las manuscritas. Así pues, la Ley Modelo puede ayudar a los Estados a establecer un marco legislativo moderno, armonizado y equitativo que permita regular con eficacia el trato jurídico de las firmas electrónicas de modo que su utilización no dé lugar a dudas sobre su seguridad (CNUDMI, 2001).

En consecuencia y a la luz de las leyes modelo emitidas en los diferentes periodos por la Comisión de las Naciones Unidas se dio un paso trascendental en lo que respecta a las actividades realizadas por medios electrónicos mediante la Ley 527 de 1999 en Colombia. Esta ley otorga reconocimiento a la existencia de valor implícito en los mensajes electrónicos, también extiende los requisitos de un título valor físico a aquellos emitidos electrónicamente como son la firma, promesa de pago, tipo de pago y cumplimiento (Leal, 2006).

La ley 527 de 1999 contempla una estructura jurídica integral que concede vía libre al uso de los mensajes de datos a través de medios electrónicos en actividades no solamente comerciales, sino todas aquellas que involucren el uso de mensajes de datos. La ley involucra acciones desde la producción hasta el consumo que se desarrollan, con el apoyo o en su totalidad, a través de sistemas electrónicos. Es importante entender que las funciones que integran este tipo de sistemas no están asociadas únicamente a internet, también comprenden el uso del teléfono, fax, televisión, télex, EDI (intercambio de datos electrónico), entre otros. Si se le concede la real dimensión a la transmisión electrónica de datos entonces se puede deducir que las actividades de “comercio electrónico” se constituían en prácticas cotidianas antes de la promulgación de la Ley 527. Esta es una ley “de carácter probatorio, que permite aplicar las mismas consecuencias jurídicas dedicadas a los medios físicos tradicionales” (Rincón, 2017).

Respecto a La ley 527 de 1999 en Colombia es la respuesta jurídica desde el legislador a las necesidades de seguridad trazadas en el marco del replanteamiento de las acciones en los intercambios tradicionales, mediante esta ley se concede reconocimiento a la igualdad en el tratamiento de la información inscrita en un papel físico y la información emitida electrónicamente como herramienta funcional que simplifica las comunicaciones e incentiva resultados objetivos en las operaciones mercantiles nacionales e internacionales (Tafur, 2009). Los títulos valores electrónicos se encuentran totalmente amparados en esta ley puesto que “define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y otras disposiciones” (Ley 527, 1999).

La Ley 964 de 2005 se constituye en otro avance en materia jurídica que concede soporte legal desde el legislativo a las operaciones mediante los títulos valores electrónicos. Esta ley presta especial atención a la expedición y utilización de los documentos electrónicos que consideren las mismas características que los documentos o títulos valores físicos, de manera colateral permite que las herramientas tecnológicas se conviertan en piezas de interés representativo en el ejercicio de las operaciones bursátiles y mercantiles. La Ley 964 al reconocer que los documentos electrónicos avanzan en su uso comercial teniendo mayor relevancia en las dinámicas financieras hace posible que mediante la anotación en cuenta, que se constituye en el sistema electrónico de “creación y circulación de los valores”, abra la puerta a este valioso elemento probatorio definido en el Artículo 2 manifestando en su parágrafo quinto que en el aprovechamiento e inversión de los recursos los documentos electrónicos “tienen las características y prerrogativas de los títulos valores, excepto en la acción cambiaria de regreso” (Parra, 2009).

La anotación en cuenta expresada en la ley 964 de 2005 hace referencia al registro que se hace durante la emisión del título valor y donde quedan definidos los derechos sobre el título en cuentas de depósitos o las mismas administradoras de depósitos centralizados de valores, esto para dar mayor certeza acerca de la creación, emisión y transferencia del título valor electrónico. En consecuencia, el titular que se encuentre determinado en los asientos del registro electrónico es el facultado del valor y quien es beneficiario de los derechos a los que se hagan referencia en el documento electrónico o título valor electrónico (Illescas, 2016).

Es así como la Ley 964 en su estructura contempla un derecho implícito en la operación electrónica y que se extiende a los títulos valores electrónicos tal como lo consagra en su Artículo 12 la misma ley:

El derecho respectivo se constituirá mediante la anotación en cuenta. En consecuencia, la emisión, los gravámenes y las medidas cautelares a que sean sometidos y cualquiera otra presunción de las retribuciones contenidas en el respectivo valor serán susceptibles de adquirir los derechos que le corresponden y tendrán su refrendación a través de la anotación en cuenta (Ley 964, 2005).

Mediante la Ley 1231 de 2008 el Congreso de la República unificó los criterios de la factura como título valor y a su vez la definió como un “mecanismo de financiación para el micro, pequeño y mediano empresario”. La promulgación de esta ley cimentó las bases de lo que sería una de las misiones más comprometidas puesto que no solo concedió claridad en cuanto a los términos contemplados en la unificación técnica de las facturas como título con valor, sino que dejó el lineamiento “para la puesta en circulación de la factura electrónica como título valor, el Gobierno Nacional se encargará de su reglamentación” (Ley 1231, 2008).

En concordancia con la ley expuesta anteriormente el Congreso de la República expidió la Ley 1753 de 2015 “por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo

2014-2018”, en esta ley se ordenó la creación del Registro de Facturas Electrónicas consideradas títulos valores, lo anterior como un mecanismo que permitiera realizar la trazabilidad en el país y permitiera centralizar la información sistematizada con el fin de ejercer mayor control desde los organismos encargados para tal fin (Ley 1753, 2015).

En los términos expresados en la Ley 1943 de 2018 publicada desde el legislativo por el Congreso de la República se inició la implementación de la factura electrónica como título valor electrónico. En este proceso se encargaba al Gobierno Nacional para que mediante la DIAN se actuara con los procedimientos de validación que comprende el conjunto de términos, plazos, mecanismos técnicos, tecnológicos y ordenamientos para la generación, transmisión y validación de los respectivos documentos con la respuesta a cargo de este organismo de control. La plataforma de factura electrónica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) incluirá el registro de las facturas electrónicas consideradas como título valor que circulen en el territorio nacional y permitirá su consulta y trazabilidad. El Gobierno Nacional con las facultades que le concede la ley reglamentará la circulación de las facturas electrónicas (Ley 1943, 2018).

El Decreto 2555 de 2010, modificado por el Decreto 3960 de 2010, permite a los Depósitos Centralizados de Valores ejercer la “custodia y administración” de los títulos valores, estos pueden estar circunscritos como títulos valores crediticios, de participación, representativos de mercancías e instrumentos financieros. El decreto en mención trae de nuevo el concepto de “equivalencia funcional” y lo conjuga con el de desmaterialización e inmaterialización de los títulos valores electrónicos toda vez que aborda las normas aplicables a los depósitos centralizados de valores, es en este decreto donde se visualizan los principios de anotación en cuenta, títulos globales, certificaciones expedidas por los depósitos centralizados de valores y se

disponen de normas dirigidas al sector asegurador, financiero y al mercado de valores (Decreto 2555, 2010).

Los esfuerzos por ver materializada una plataforma jurídica que conceda soporte legal a los títulos valores electrónicos en Colombia se ve fortalecida por normativas que permiten la regularización de la expedición de la factura electrónica como título valor, es por ello que a la luz del Decreto 2242 de 2015, compendiado posteriormente en el Decreto 1625 de 2016 y alineándose con la Ley 1819 de 2016 contra el fraude, la evasión y el contrabando, los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo en cooperación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) emiten el Decreto 2242 que es promulgado por la Presidencia de la República (ASOBANCARIA, 2017).

El Decreto 2242 de 2015 y el Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016, además de abordar lo concerniente a la factura electrónica que se encuentra mencionada en las normas tributarias, también contienen importantes referencias sobre la posibilidad de creación, emisión y negociación de “títulos valores desmaterializados”. El Decreto 2242 de 2015 en su guerra contra las operaciones ilegales y que derivan en acciones contra las leyes establecidas, comisiona para que sea la DIAN quien acceda a la estructuración tecnológica de la factura electrónica con los proveedores autorizados y sean estos los encargados de fundamentar todo lo asociado al recibo, rechazo y conservación del título valor inmaterial, además de comprender los propósitos tributarios correspondientes (Decreto 2242, 2015).

Los títulos valores electrónicos han ocupado un lugar de interés mediante leyes, decretos, proyectos de ley y en la necesidad de legislar hacia una estructura jurídica que brinde mayores herramientas legales para obtener certeza en las operaciones mercantiles, comerciales y financieras (Posner, 2007).

En esa línea es como el Decreto 1349 de 2016 expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo establece los parámetros reglamentarios para la circulación de la factura electrónica como título valor en Colombia y su respectivo registro. La promulgación de este decreto abrió el espacio para que se publicara el Manual de Funcionamiento del Administrador de Registro de Facturas Electrónicas con el objetivo de brindar un espacio para la resolución de inquietudes en temas relacionados con los sistemas de negociación, costos del registro y la validez de la inscripción (Santos, 2017).

El Decreto 1349 de 2016 tiene antecedentes sólidos en lo que respecta a las normas que se expidieron como fundamento jurídico en la construcción del tejido legal que permitiera en derecho formular escenarios congruentes para los títulos valores electrónicos como parte de los nuevos desarrollos tecnológicos. Es importante mencionar que previo a este decreto la Ley 1231 de 2008 que actualizó la legislación comercial acerca de los títulos valores, hizo aportes extensivos en materia jurídica sobre las facturas de bienes y servicios que estuvieran sujetas a los requisitos de ley, además la Ley 1753 de 2015 dispuso las directrices para que el Gobierno Nacional reglamentara el avance del proceso de registro de facturas electrónicas como títulos con valor susceptible de ser negociado (Merchán, 2017).

El Decreto 1349 de 2016 hace énfasis en el carácter de título valor de las facturas refrendando además el concepto tecnológico de títulos valores y facturas electrónicas como instrumentos fundamentales en las prácticas mercantiles y comerciales modernas. El propósito del decreto también está dirigido a facilitar y fomentar la negociación de facturas en los empresarios, además de ofrecer beneficios rápidos y seguros en lo que respecta a las fuentes de financiación de los empresarios. Este decreto considera la factura electrónica como título valor y lo define como:

Como título valor la factura electrónica tiene inmerso un mensaje de datos que evidencia una transacción o intercambio de bienes materiales o inmateriales, que es recibida en aprobación sobrentendida o formalmente por el adquirente, y que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 774 del Código de Comercio (Decreto 1349, 2016).

Las discusiones sobre los títulos valores electrónicos también están representadas en el Proyecto de Ley No. 106 de 2016 del Senado y 253 de 2017 de la Cámara de Representantes. Los aportes jurídicos de esta iniciativa “por medio de la cual se regula la creación, circulación, aceptación, el aval y demás actos cambiarios sobre el título valor electrónico”, fomentan los instrumentos disponibles en la misión de conceder seguridad jurídica a este tipo de valores, tal como lo resume el texto del radicado:

Esta iniciativa busca regular la creación, expedición, circulación, aceptación, el aval y demás actos cambiarios respecto de cualquier título electrónico, con el fin de mitigar cualquier duda sobre las pautas que deben regir la materia y eliminar la incertidumbre jurídica sobre esta materia. De esta manera se busca precisar cómo se perfeccionan jurídicamente la creación y demás actos cambiarios sobre los títulos valores que se realizan a través de medios electrónicos (Proyecto de Ley 106, 2016) (Proyecto de Ley 253, 2017).

7. Capítulo II.

Caracterización de los títulos valores y títulos valores electrónicos en la dinámica comercial colombiana

7.1. Caracterización de los títulos valores

Los títulos valores tranzados en las actividades mercantiles se encuentran compendiados en el Código de Comercio de Colombia que adquirió cuerpo jurídico mediante el Decreto 410 de 1971 expedido por la Presidencia de la República. El título III “De los Títulos Valores” en su estructura contiene las respectivas generalidades y características de los títulos valores. La recopilación legal que fue promulgada mediante este decreto articuló dentro de los títulos valores reconocidos la letra de cambio, el pagaré, el cheque, los bonos, los certificados de depósito y bonos de prenda, carta de porte y conocimiento de embarque, facturas cambiarias y acciones.

Los títulos valores encuentran su definición en el Capítulo I del Título III de este decreto donde no solo ampara el actuar desde el uso comercial que tradicionalmente se le conoce, sino que hace una estrecha relación entre los títulos como documentos, los valores como representación comercial y mercantil, además del ejercicio del derecho que le otorga legitimidad al amparo de las leyes y la protección del Estado. Es así por lo que en su definición menciona que “los títulos-valores son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Pueden ser de contenido crediticio, corporativos o de participación y de tradición o representativos de mercancías” (Artículo 619, 1971).

En este sentido la reglamentación dispuesta en el Decreto 410 de 1971 hace una detallada descripción legal de cada uno de los títulos valores reconocidos en Colombia, considerando que

esos mismos títulos son de uso cotidiano en los diferentes mercados y transacciones comerciales en el mundo. El decreto expone las herramientas jurídicas para garantizar la seguridad legal en las operaciones que demanden este tipo de acciones comerciales y mercantiles.

En el contexto de la diversidad de los títulos valores contemplados en el Código de Comercio de Colombia se encuentran las siguientes caracterizaciones:

Letra de cambio: Es un título valor de tipo crediticio por el cual una persona realiza las veces de girador, y es quien ordena a otra denominada girado o librado, el pago de un compromiso acordado de manera incondicional a un tercero, denominado beneficiario o tenedor, teniendo en cuenta que se ha acordado una fecha y un lugar específicos. La letra de cambio está regida por los requisitos de conformidad con lo establecido en el Artículo 671 del Código de Comercio (Marroquín, 2005).

Pagaré: Es reconocido como un título valor que se emite en circunstancias crediticias, en este sentido la persona que se le nombra otorgante asume el compromiso de cubrir sin restricciones la cantidad de dinero definida a otra parte llamada tomador o beneficiario, a sus disposiciones o a quien porte el documento. Conforme a lo establecido en el Código de Comercio el pagaré se encuentra regido por los requisitos del Artículo 621 en su calidad de título valor (Artículo 709, 1971).

Cheque: Este título valor está contenido en el Artículo 712 del Código de Comercio y por su calidad también está regido por los requisitos contemplados en el Decreto 410 y a los términos legales que le confiere la regulación existente. Según lo referencia el investigador y autor Jaime Ruíz lo precisa como un título valor suscrito sobre un formato bancario que tiene una impresión definida, en cuyas líneas se determina una orden incondicional de pagar una cantidad definida de dinero, dirigida por el girador para ser efectiva en una entidad bancaria o también es cedido para

ser cancelado a su presentación con fundamento en un contrato de cuenta corriente bancario celebrado entre las partes que intervienen (Ruiz, 2003).

Bonos: Son títulos valores que se encuentran amparados ampliamente en el Código de Comercio y que a su naturaleza le asiste una parte proporcional de un crédito que se ha asumido de manera grupal y cuya constitución se dirige al cargo de una sociedad o entidad sujetas a la inspección y vigilancia del Gobierno (Artículo 752, 1971). Los títulos representativos de los bonos tendrán una disposición serial para su identificación. En cada serie los bonos tendrán valores ponderados o proporcionales. No se excluye que se puedan emitir varias series de bonos. Conforme a las disposiciones contenidas en la norma reglamentaria en cada cupón se indicará el título al cual pertenece, su número, valor y fecha de su exigibilidad (Artículo 753, 1971).

Certificados de depósito y bonos de prenda: Este tipo de título valor puede ser expedido por un almacén en propiedad para hacerlo como soporte por las mercancías o bienes que le sean dejados en consignación, así podrán ser documentos de depósito o bonos que certifiquen que se encuentran dentro de los determinados como bonos de prenda. Estos documentos que adquieren las veces de certificados de depósito tienen implícitos los derechos de quien deja en depósito la mercancía con el fin de ser usado como una herramienta que transfiere a quien adquiera los títulos y los derechos que le son reconocidos. Esta categoría de título valor es reconocido puesto que en su significación contiene un crédito en calidad de prenda sobre los bienes que han sido registrados en el certificado como documento de depósito y otorga los mismos derechos que un registro mediante la prenda (Artículo 757, 1971).

Carta de porte y conocimiento de embarque: Dada la naturaleza de tenencia para el transporte de bienes o mercaderías en su definición la carta de porte y el conocimiento de embarque representarán su calidad de títulos asociados a las mercancías de manera representativa y que están bajo su custodia en calidad de ser trasladadas o reubicadas mediante un sistema de

transporte (Artículo 767, 1971). A la carta de porte y al conocimiento de embarque se aplicarán, en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio y al pagaré (Artículo 771, 1971).

Factura cambiaria: La Factura se encuentra reconocida en el Código de Comercio y en las leyes que le son afines como un título con valor comercial que emite un sujeto en calidad de prestador de algún tipo de servicio o como explícito manifiesto por la venta de un tipo de bien que ha sido seleccionado de manera voluntaria y expresa por un comprador, quien en su calidad de adquiriente portara el documento como constancia certificada de haber realizado la adquisición de forma física o pactada contra entrega. Quien haga las veces de vendedor deberá dejar registro de la transacción y dispondrá para que sea entregado al comprador el respectivo documento demostrativo. El portador de la factura como título de compra es avalado como el beneficiario del valor adquirido y será el documento de titularidad con precisión a las exigencias que le sean abonadas como derecho en calidad de portador. El emisor deberá conservar los registros emitidos a fin de realizar la respectiva certificación contable mediante el registro en cuenta. Las facturas producto del ejercicio comercial podrán ser tasadas con fines de compraventa (Artículo 772, 1971).

Acciones: Los títulos reconocidos con valor y que producen en el mercado bursátil una renta variable les otorgan a los individuos la posibilidad que, en calidad de propietarios de una empresa, puedan realizar la difusión de partes valoradas de la empresa y que después de emitidas le otorga derechos que se encuentran circunscritos a los propios certificados del ejercicio como titular de un conjunto de títulos o acciones y a su vez, pueda definir en temas relacionados con la empresa. Dentro de las características de este tipo de emisiones se encuentra el que la persona que realiza la inversión mediante la compra de un grupo o paquete de acciones las considere como una inversión de plazos variables en corto o largo tiempo, pero con el beneficio de la colocación en el mercado basado en la liquidez y tenga la posibilidad de obtener beneficios por

la venta en cualquier momento según los estatutos de la empresa. (Artículo 780, 1971). En el marco de la constitución de sociedades por acciones han sido facultadas para realizar la publicación de los paquetes accionarios y transarlos en el mercado de valores, esos beneficios serán distribuidos de igual manera entre los portadores, así mismo se respetarán los títulos en poder de los derecho habientes en su calidad normativa e inseparable (Castro, 2019).

Las definiciones anteriores que caracterizan los diferentes tipos de títulos valores tradicionales reconocidos en el Código de Comercio de Colombia han fomentado el crecimiento de la actividad mercantil y comercial, así como el acervo jurídico que concede certeza legal a las operaciones que se realizan en el país y en el exterior. Las leyes en su conjunto han permitido que Colombia ingrese con instrumentos reconocidos al ámbito del comercio global y pueda soportar de manera eficaz la internacionalización de sus mercados.

7.2. Títulos valores electrónicos en la dinámica comercial colombiana

La legislación colombiana ha demostrado avances en las leyes, decretos y reglamentaciones y aquellas emitidas desde el Ejecutivo, organismos como la DIAN y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Si bien la caracterización de los títulos valores tradicionales evidencia que existe una variedad de instrumentos a disposición de los actores en las operaciones comerciales y mercantiles, es cierto que lo que corresponde a los títulos valores electrónicos se percibe con un limitado uso de estos mecanismos de intercambio y negociación.

Tradicionalmente la utilización de los títulos valores ha estado sujeta al trámite a través del papel y la impresión de firmas físicas como acto de refrendación del proceso, y ello ha constituido una práctica que se ve retada por la digitalización de las funciones en un país con acceso restringido por diferentes factores al uso del internet. Entonces el conocimiento de todas

las posibilidades, incluidas las jurídicas, se torna afectada por el alcance condicionado aún de los individuos y organizaciones que ejercen algún tipo de intercambio comercial.

En la actualidad solo unas pocas formas que comprenden los títulos valores han sido acondicionadas y reglamentadas para que sean funcionales electrónicamente y sus operaciones tengan el debido respaldo jurídico entorno a la norma y la ley. Es importante reconocer que implementar un nuevo modelo como es el caso de los títulos valores electrónicos, a través de modelaciones y plataformas informáticas, requiere de la regulación mediante las normas expedidas por las autoridades, además de los respectivos desarrollos para su funcionamiento e innumerables pruebas piloto que son el preámbulo a la masificación de las instrucciones para su puesta en marcha.

En este sentido la factura electrónica en Colombia adquirió cuerpo jurídico como título valor electrónico mediante el Decreto 1929 de 2007 por el cual se reglamentó el Artículo 616-1 del Estatuto Tributario donde se señalaron las bases primarias concernientes a la autenticidad e integridad de la factura electrónica, los acuerdos correspondientes a la expedición y aceptación, las exclusiones, los requisitos técnicos de la factura electrónica y notas crédito, exhibición, conservación, control de la emisión, las obligaciones que asumen quienes en su calidad de emisores realicen la expedición de la factura electrónica y la factura electrónica como soporte fiscal (Decreto 1929, 2007).

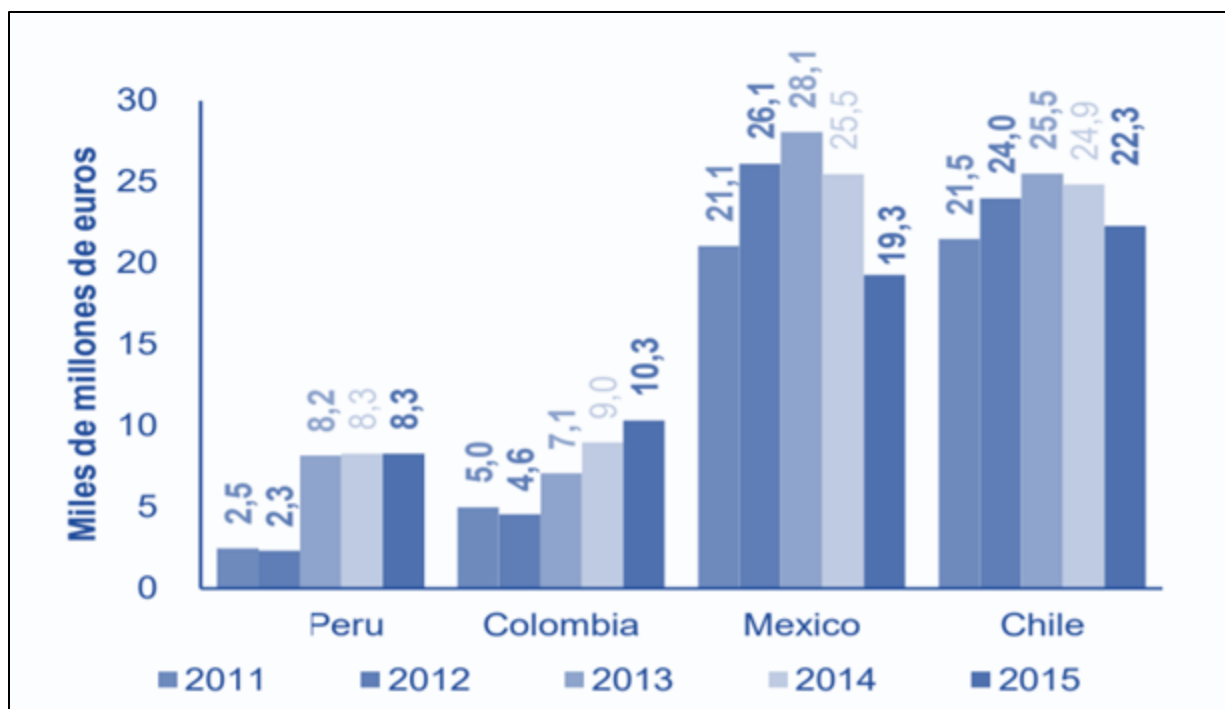
La factura electrónica fue unificada como título valor y se designó al Gobierno Nacional a reglamentar su validez para circular de manera electrónica a través de la Ley 1231 de 2008. La ley 1753 de 2015 que expidió el Plan de Desarrollo 2014-2018 dispuso la creación del Registro de Facturas Electrónicas que tuvieran la categoría de título valor, posteriormente el Decreto 2242 de 2015 emitido por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y el de Comercio, Industria y Turismo con el apoyo de la DIAN dictaron la normativa que regulariza la emisión e

interoperabilidad de la factura electrónica donde se tiene por objetivo ejercer control fiscal que haga frente al fraude, evasión y contrabando.

El Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016 se publica “para compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario que rigen el sector y contar con instrumentos jurídicos únicos”, tiene su naturaleza en materia tributaria y determina que la factura electrónica es un documento que sustenta las transacciones de venta de bienes y servicios en cuyos procedimientos tecnológicos se garantice la autenticidad e integridad del documento electrónico (Decreto 1625, 2016). En consecuencia, los esfuerzos por realizar la implementación de la factura electrónica se vieron materializados en la Resolución 000042 del 05 de mayo de 2020 donde la DIAN reglamenta los cambios para los sistemas de facturación en Colombia. En esta resolución se establece el calendario que corresponde para la implementación de la factura electrónica, requisitos, condiciones y procedimientos aplicables a las facturas y los sistemas de facturación (Resolución 000042, 2020).

Figura 2.

Evolución de la cartera de facturas electrónicas como títulos valores por cobrar en Colombia y otros países entre los años 2011 y 2015



Nota. La figura muestra las variaciones en el crecimiento de las facturas electrónicas como títulos valores por cobrar o en modalidad de factoring en Colombia y otros países entre los años 2011 a 2015. Fuente: Asobancaria: Publicación Semana Económica (2017)

Para efectos de implementación la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) lanzó su plataforma para el Registro de Facturas electrónicas de la DIAN (RADIAN) dispuesta para que los empresarios puedan realizar la actualización de la información de las transacciones mediante la factura electrónica como título valor. Las operaciones realizadas a través de este mecanismo permiten a los empresarios obtener liquidez por las ventas a plazos, unicidad de estos documentos electrónicos, trazabilidad en la propiedad y también concede a las empresas obtener liquidez a partir de sus facturas por cobrar (factoring) registradas en el sistema (Resolución 000063, 2021).

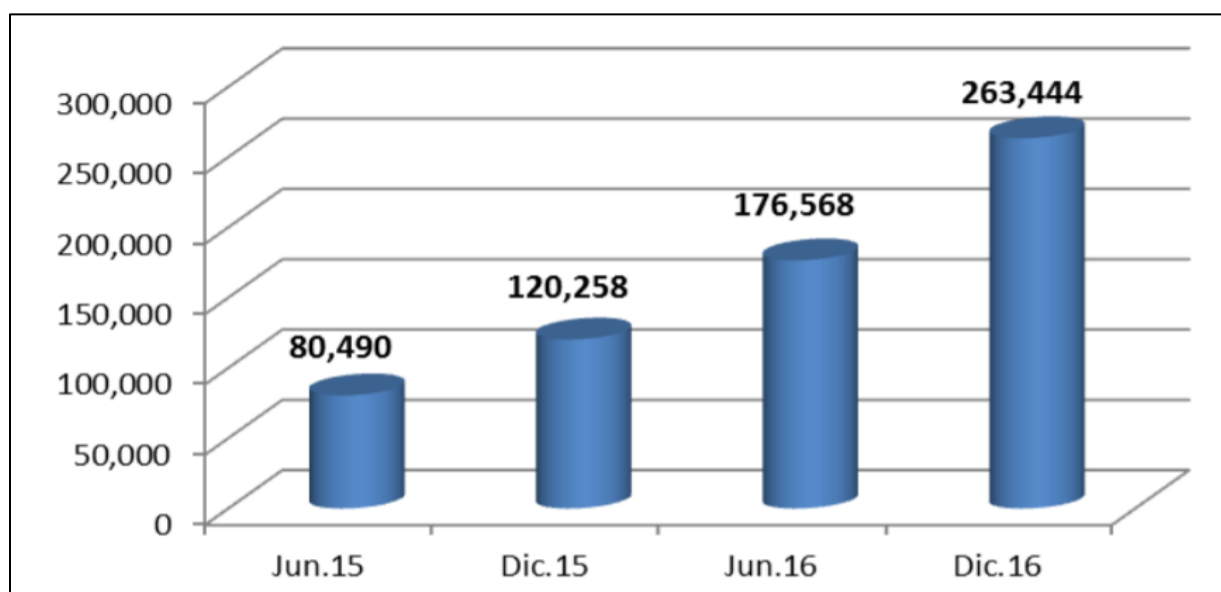
El Pagaré electrónico como título valor encuentra su soporte jurídico en la Ley 27 de 1990, la Ley 527 de 1999, la Ley 964 de 2005 que mencionan los títulos valores

desmaterializados o inmaterializados. En este sentido el Banco de la República mediante la Resolución Externa No 13 de 2016 define:

Se entenderá por pagarés desmaterializados, aquellos documentos que mediante un proceso certificado de inmaterialización a través de un sistema informático con soporte electrónico, sea detenido el documento físico de papel, haciéndose efectiva la transición de un documento portado de manera física a uno digitalizado en calidad de auténtico y consignado a manera de custodia en los depósitos centralizados que se encargarán de ejercer la administración y seguimiento del pagaré electrónico bajo la autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia que cumpliendo con los requisitos establecidos por esta entidad y aquellos adicionales que establezca el Banco de la República (Resolución Externa No 13, 2016).

Figura 3.

Pagarés en custodia en el depósito centralizado de valores Deceval



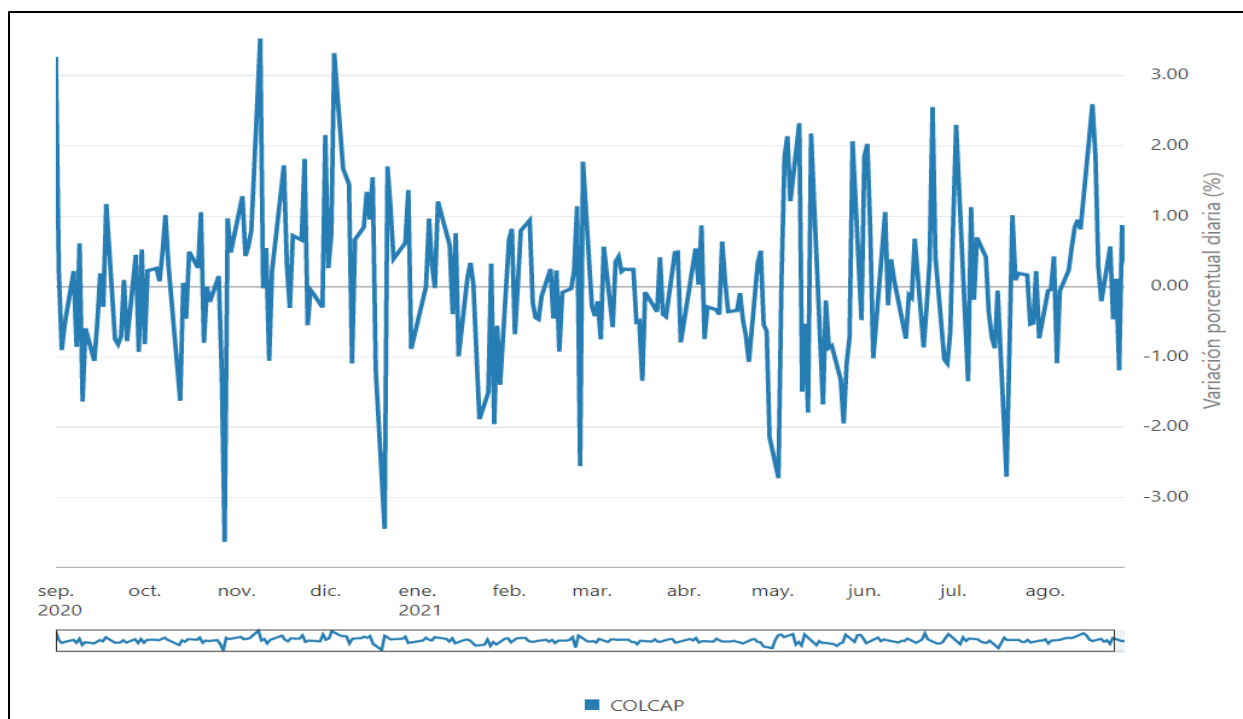
Nota. Evolución de los pagarés desmaterializados en custodia en el depósito centralizado de valores de Colombia Deceval en el año 2015 y 2016. Fuente: Deceval (2017)

El endoso de pagarés electrónicos como títulos valores está sujeta a las disposiciones legales y a las reglamentaciones establecidas en el marco jurídico que ampara estas operaciones y su registro debe contar con la respectiva anotación en cuenta, así mismo se determinó que la posibilidad de acceder a los recursos del banco asociados a estos títulos valores se hará mediante el descuento o redescuento de los pagarés emitidos electrónicamente o los que hayan sido desmaterializados o inmaterializados.

Las Acciones como título valor electrónico se encuentran reglamentadas por las leyes y decretos que han posibilitado que sean transadas de manera electrónica a través de los depósitos centralizados de valores. Específicamente en el caso colombiano se ha otorgado esta actividad a la Bolsa de Valores de Colombia S.A. constituida como una sociedad anónima domiciliada en Bogotá y que hace las veces de aliado estratégico del sector financiero y bursátil, líder del mercado de capitales. En Colombia el COLCAP es un índice de capitalización que refleja las variaciones de los precios de las acciones más líquidas de la Bolsa de Valores de Colombia y define las constantes variaciones de estos títulos valores en el mercado.

Figura 4.

Variación del mercado accionario en la Bolsa de Valores de Colombia



Nota. La figura muestra las variaciones porcentuales diarias en los precios de las acciones transadas en el mercado colombiano a través de la Bolsa de Valores de Colombia mediante el índice COLCAP en los años 2020 y 2021. Fuente: Bolsa de Valores de Colombia (2021)

Los títulos valores electrónicos que son transados en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) tienen una amplia participación empresarial y sus dinámicas también están vinculadas a las operaciones realizadas por otras bolsas de valores internacionales. El mercado de acciones es reconocido en el mundo mercantil y su respaldo está amparado jurídicamente por las leyes que en este sentido se han promulgado en el país. Acerca del mercado de acciones como títulos valores electrónicos la Bolsa de Valores de Colombia define:

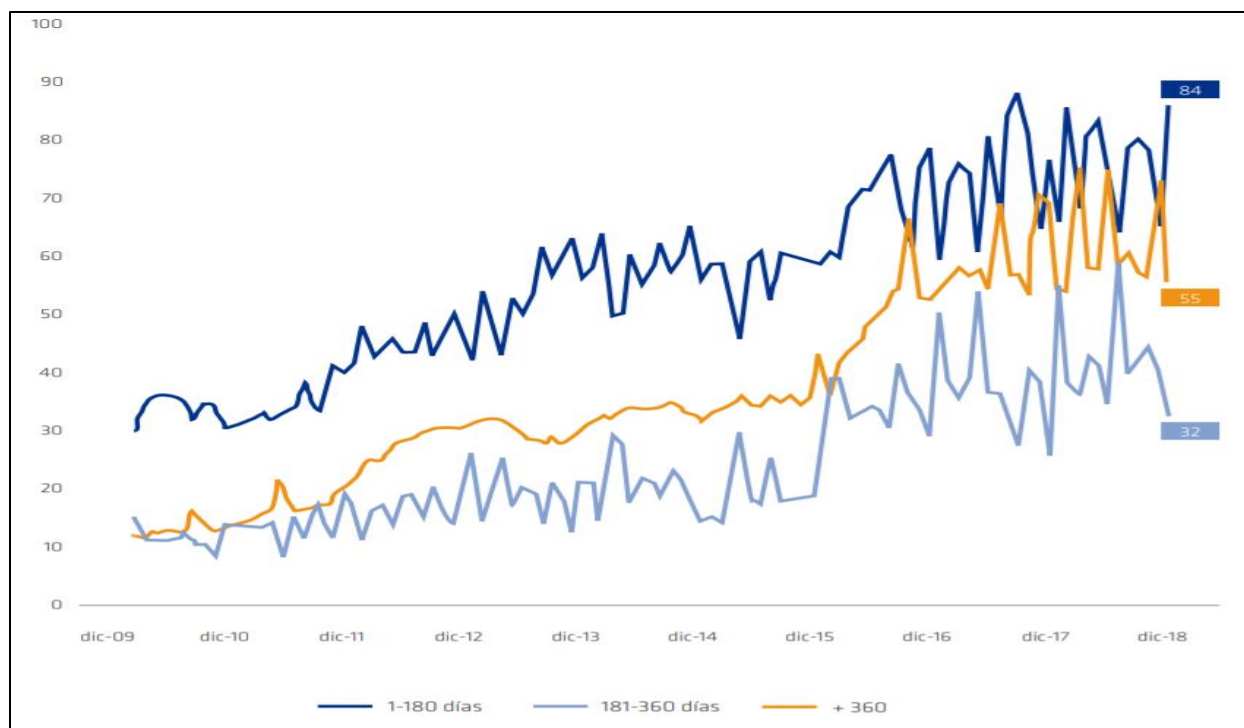
El mercado de valores es el centro con facultades otorgadas por el Estado colombiano y la estructura legislativa promulgada con el fin de transar títulos valores electrónicos en calidad de acciones con rendimientos variables en el consenso del conocimiento de las diversas fuerzas especulativas que alteran los mercados de valores. Los beneficios adquiridos en la operación donde se transan las acciones son reconocidos como utilidades y están sujetos a la cotización en

bolsa de la empresa donde se opta por realizar la inversión y las condiciones cambiantes de los diferentes mercados. La Bolsa de Valores de Colombia administra el sistema transaccional para la negociación de Acciones, soportada en la plataforma de negociación X-Stream de Nasdaq-OMX (BVC, 2021).

Los CDT electrónicos como títulos valores desmaterializados o inmateralizados cuentan con una creciente participación en el mercado de valores, si bien otros títulos valores se encuentran en proceso de hacer su paso a las transacciones digitales, los CDT van ganando reputación en el mundo digital dada la solidez legal que en términos jurídicos se ha fomentado en Colombia. Los CDT como títulos valores electrónicos cuentan con iguales privilegios legales que los emitidos físicamente, al aplicarse el principio de equivalencia funcional se le otorgan los derechos amparados en la leyes establecidas y reconocidas por el Estado.

Figura 5.

Evolución histórica de los CDT electrónicos como título valor por plazo medido en billones de pesos



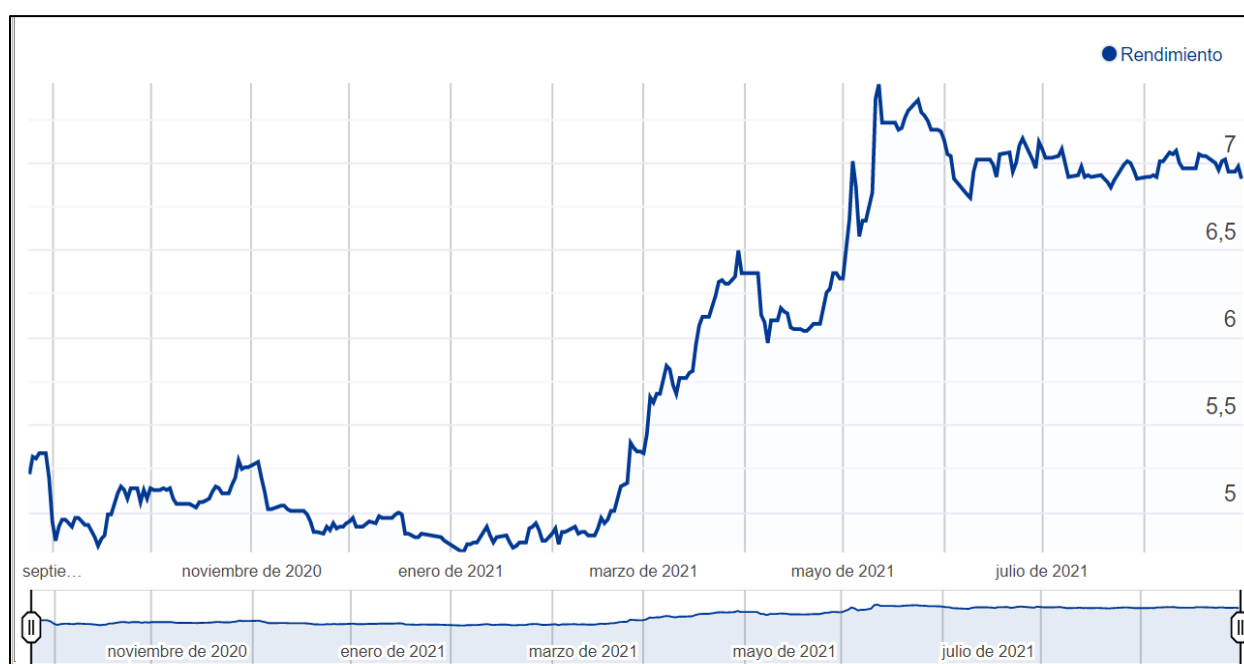
Nota. La figura describe los plazos de CDT donde los ahorradores prefieren los menores a un año, a finales de 2018 el 49% prefirió plazos menores de 180 días, y el 32% para las elecciones mayores a un año. Las cifras están medidas en billones de pesos entre los años 2009 y 2018. Fuente: SFC. Actualidad del Sistema Financiero de Colombia (2018)

El CDT electrónico tiene los atributos reglamentados mediante las disposiciones contenidas en las leyes 527 de 1999, 964 de 2005, 1231 de 2012, 1753 de 2015, los decretos 2242 de 2015 y 1349 de 2016 ofreciendo seguridad legal y validez probatoria en el marco de la certeza jurídica para este tipo de operaciones comerciales. El CDT como título con valor electrónico ofrece mayor protección contra posibles hurto, fraude, pérdida o deterioro, además de ofrecer agilidad en su emisión, así como la facilidad en la negociación y redención. El título valor desmaterializado reduce los costos en su expedición, minimiza los riesgos de fraude y se custodia en sistemas encriptados que han sido codificados por sistemas de programación avanzada.

Los Bonos como títulos valores se transan de manera electrónica en los mercados del mundo con el respaldo de la Bolsa de Valores de Colombia y con el amparo de la regulación vigente para los títulos con valor comercial y mercantil contemplados en el Código de Comercio de Colombia promulgado mediante el Decreto 410 de 1971 y soportado en las disposiciones que para efectos de digitalización se han expedido posteriormente en el país.

Figura 6.

Variación en la cotización de los bonos transados electrónicamente en Colombia



Nota. La figura muestra el rendimiento y la variación porcentual en la cotización de los bonos transados electrónicamente en Colombia en los años 2020 y 2021. Fuente: Datosmacro (2021)

Según las operaciones que realiza el Autorregulador del Mercado de Valores (AMV) en Colombia el movimiento de los bonos como títulos valores que se transan electrónicamente está determinado en gran medida por negociaciones en el extranjero habilitados por la interacción de la legislación colombiana con la internacional. Según la publicación del Autorregulador del Mercado de Valores los bonos se contextualizan de la siguiente manera:

Los bonos son títulos clasificados dentro de los valores de deuda que son transados en mercados internacionales donde se considere la mejor posibilidad de rentabilidad en la tasa de negociación en los plazos acordados y cuyos pagos se realizan en dólares a las tasas representativas del mercado a la fecha de negociación de los mismos y sometidos a los efectos de variabilidad en la cotización. Los pagos de estos títulos valores cuya colocación se hace en el extranjero se hacen en divisas que tienen reconocimiento y soporte internacional. Se negocian y registran en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). Desde el Gobierno Nacional los bonos son emitidos en dólares para ser colocados en territorios extranjeros, al igual que los emisores certificados que requieren algún tipo de financiación mediante este título valor y adquirir liquidez en condiciones favorables del mercado de valores internacional. Estos títulos pueden negociarse desde Colombia a través de un intermediario con la característica mencionada sobre su denominación y pago en dólares (AMV, 2020).

Los títulos valores electrónicos en Colombia ven reflejado el aumento de las operaciones asociadas a ellos como resultado del esfuerzo legislativo, gubernamental y de los organismos de control que han reglamentado la implementación de su funcionamiento en la era digital. Es certero que se continuará legislando para proveer las herramientas jurídicas que dan seguridad legal a estos ejercicios y los retos en materia informática también plantean nuevos avances.

8. Capítulo III.

Depósitos centralizados de valores en Colombia

Los títulos valores electrónicos no solo sugerían una legislación que permitiera la seguridad jurídica en la realización de sus operaciones, también fue necesaria la articulación del Gobierno Nacional con los diferentes organismos para proporcionar las condiciones de implementación y certeza legal, con prevalencia en el tiempo, acorde con los sistemas internacionales, este reto condujo a que la nueva figura requiriera de un sistema de custodia plenamente habilitado donde pudieran reposar con seguridad los títulos valores de forma desmaterializada.

Así nacieron los Depósitos Centralizados de Valores que están definidos como: Las instituciones de carácter público o privado que se encargan de proceder a la custodia y administración de los títulos valores inmaterializados o desmaterializados posterior a la recepción de los valores que han sido sometidos a algún tipo de negociación en el mercado de valores. Las entidades realizan la inmovilización de los títulos valores en bóvedas encriptadas y codificadas bajo los más estrictos parámetros de seguridad y a su vez facilitando su tránsito en registros electrónicos ejecutando así la inmovilización de los documentos físicos, este mecanismo brinda altos estándares de trazabilidad y permite conocer el estado de los títulos valores en tiempo real. En Colombia en la actualidad se encuentran reconocidos dos depósitos: DECEVAL que es el Depósito Centralizado de Valores actuando como sociedad anónima y el DCV. Cuando un inversionista compra o vende valores se realiza un registro electrónico en el cual se deja constancia de la cantidad de valores que ha recibido o entregado con ocasión de la operación realizada. Esto se debe a que actualmente en el mercado de valores no se negocian los

títulos de forma física (por lo que el inversionista no entrega o recibe ningún título físico). Lo anterior facilita la negociación de los valores a través de sistemas electrónicos (Banco de la República, 2019).

Las normas que soportan la operación de los Depósitos Centralizados de Valores están incorporadas en el Decreto 2555 de 2010, a partir del desarrollo de la Ley 27 de 1990, los decretos 437 de 1992, 1936 y 1995, así como la Resolución 1200 de 1995 de la Superintendencia de Valores (ahora Superintendencia Financiera), así como en los artículos 21 de la ley 31 de 1992 y 22 de los Estatutos del Banco de la República expedidos mediante Decreto 2520 de 1993.

Los dos depósitos centralizados de valores habilitados en Colombia que custodian títulos electrónicos son DECEVAL que es el Depósito Centralizado de Valores actuando como sociedad anónima y el DCV que es el Depósito Centralizado de Valores del Banco de la República. Ambas entidades realizan sus operaciones mediante la inmaterialización de los títulos valores creando el manejo desmaterializado y dejando constancia en el registro contable electrónico. Los instrumentos custodiados en estas instituciones comprenden los títulos valores que, bajo el amparo de la ley y las reglamentaciones establecidas, son depositadas con fines comerciales y mercantiles, muchos de estos títulos pertenecen a fondos de pensiones, compañías de seguros, corredores de bolsa, fondos mutuos, bancos y sus clientes.

Tal y como lo reglamenta la ley y las disposiciones establecidas en la estructura jurídica que las habilitó, estas entidades se encuentran bajo el control y vigilancia de los organismos facultados para tal fin, es así como desde el legislativo y el sistema judicial con el apoyo del ejecutivo se concilian los mecanismos de aplicación y los que rigen las transacciones a través de títulos valores electrónicos, y su interacción comercial y mercantil.

Los Depósitos Centralizados de Valores en Colombia también contienen en su ejercicio la prevalencia de los principios rectores de los títulos valores, prolongándolo aún en la

inmaterialidad como refrendación de su validez formal y legal. El principio de “Legitimación” define que el poseedor del título “tiene la condición de tenedor legítimo” (Artículo 625, 1971), el principio de Literalidad “estipula la dimensión de los derechos y las obligaciones contenidas en el título valor” (Artículo 626, 1971), el principio de Autonomía refiere que “la vinculación o participación de cada suscriptor es autónoma” (Artículo 627, 1971) y el principio de Derecho Incorporado donde se incorpora el “valor de un crédito, si el título valor es de contenido crediticio. Se incorpora el valor de las acciones si el título es de participación. Se incorpora el valor y descripción de mercaderías, si es de tradición o representativo” (Artículo 628, 1971).

9. Reflexión Final

Los títulos valores electrónicos en Colombia hacen parte de la realidad cotidiana del comercio y la actividad mercantil, su dinámica está inscrita en el entorno socio jurídico del país y sus operaciones no solo requieren de un gran tejido tecnológico, también están sujetas a la salvaguarda y control de Estado a través de las leyes, decretos, resoluciones y todas las normativas que, desde los organismos de control, se han estructurado para ejercer seguimiento a los movimientos de los diferentes sectores.

El presente documento hace especial énfasis en el análisis de las leyes y las normas que reglamentan la práctica de las operaciones que involucran los títulos valores electrónicos en Colombia, puesto que contempla no solo a quienes en el ejercicio del derecho tutelan los intereses del colectivo comercial, sino que también comprende a todos los ciudadanos, quienes desde sus acciones mercantiles, requieren ajustarse a los avances tecnológicos brindados por los sistemas que fomentan el intercambio mediante el flujo de capitales y negociaciones en todas las escalas, además de ofrecer un panorama para el entendimiento de las disposiciones legales que rigen los mercados en el territorio nacional e internacional.

El estudio de las leyes existentes y su respectiva implementación permiten fomentar el conocimiento a través del conjunto jurídico referente a los títulos valores electrónicos existente en Colombia y la utilidad de su aplicación en las esferas del cotidiano social, entendiendo que la aproximación a su conocimiento implica que los colectivos reflexionen acerca del fundamento teórico que lo compone y su relación con los sistemas sociales a través de su estructura jurídica.

En este sentido Colombia ha fundamentado unas bases sólidas en lo que respecta a contemplar de manera amplia los términos jurídicos suficientes para conceder Validez Probatoria

a los títulos valores electrónicos sin perder en su orientación los principios de Legitimación, Literalidad, Autonomía y Derecho Incorporado que rige a los títulos valores tradicionales. En la historia reciente del derecho y desde el legislador como fuente primaria en la promulgación de leyes se ha evidenciado un esfuerzo sustancial en el interés de expedir normas que concedan seguridad jurídica en los ejercicios comerciales y mercantiles.

Los títulos valores electrónicos en Colombia están en la realidad financiera del país y la utilización de las herramientas tecnológicas en las operaciones comerciales y mercantiles fomentan el uso de la red en beneficio de realizar operaciones en tiempo real desde la comodidad y seguridad de un espacio adecuado, pero también reduce las emisiones de documentos físicos y desincentiva el uso de papel como fuente de soporte legal. La masificación de este tipo de actividades hace su aporte al cuidado del medio ambiente con la certeza jurídica que ofrece un compendio legal sólido.

10. Conclusiones

Colombia ha fundamentado unas bases sólidas en lo que respecta a contemplar de manera amplia los términos jurídicos suficientes para conceder Validez Probatoria a los títulos valores electrónicos sin perder en su orientación los principios de Legitimación, Literalidad, Autonomía y Derecho Incorporado que rige a los títulos valores tradicionales. El Código de Comercio promulgado mediante el Decreto 410 de 1971 en su Artículo 619 hizo extensiva la definición que también ampara a los títulos valores electrónicos desde la perspectiva de los desarrollos tecnológicos.

En la historia reciente del derecho y desde el legislador como fuente primaria en la promulgación de leyes se ha evidenciado un esfuerzo sustancial en el interés de expedir normas que concedan seguridad jurídica en los ejercicios comerciales y mercantiles, de la misma manera que se ha fortalecido el sistema judicial en aras de hacer frente a los delitos y actividades fraudulentas que comprometen los sistemas informáticos. En consecuencia, se percibe mayor seguridad en la reserva financiera de quienes acceden a interactuar con los títulos valores electrónicos y se han creado climas de confianza en los poseedores de capitales.

Las leyes, decretos y reglamentaciones promulgadas desde el legislativo y que han sido respaldadas por el Gobierno Nacional y los diferentes organismos de control son un avance que contribuye al ordenamiento jurídico colombiano en temas de seguridad informática y en el fortalecimiento comercial y mercantil con títulos valores inmaterializados, pero supone la realización de mayores esfuerzos en la definición de políticas que contribuyan a dar respuesta oportuna a los retos, que en materia tecnológica, impone la globalización de los mercados.

Si bien existe un conjunto sólido de normas que conceden Validez Probatoria a los títulos valore electrónicos en Colombia, también es necesario reconocer que los avances tecnológicos en materia de programación informática y el ritmo de los intercambios comerciales crece de manera exponencial, las cifras muestran que los títulos valores electrónicos tienen mayor alcance en el interés de inversionistas públicos y privados, y ello determina que desde el Congreso de la República y el Gobierno Nacional es fundamental legislar y promulgar sin dilaciones y entendiendo que se deben maximizar los esfuerzos para dar respuesta a la creciente dinámica de los valores electrónicos.

En la realidad jurídica colombiana es probable que las normas existentes se perciban limitadas y con serios vacíos para dar respuesta a los retos en materia legal frente a lo que supone la actividad financiera que involucra a los títulos valores electrónicos, pero esa sensación limitante no ha sido razón para dejar de reconocer que el marco jurídico existente ha respondido a las realidades colombianas y ha permitido que se realicen crecientes movimientos bursátiles en Bolsa de Valores, Depósitos Centralizados de Valores y se haya generado confianza para créditos públicos en el campo internacional.

La seguridad jurídica, tecnológica y los avances en el desarrollo informático han fomentado el crecimiento del intercambio comercial internacional. Los Tratados de Libre Comercio en alianza con la implementación de una robusta legislación ha permitido que empresas de diferente orden y emprendedores encuentren fuerzas motivantes en el respaldo que encuentran en la transacciones e intercambios que comprometen los títulos valores electrónicos hacia cualquier lugar del mundo.

11. Recomendaciones

El Valor Probatorio de los títulos valores electrónicos en Colombia está soportado en las amplias normas que se han promulgado y en su eficacia en la implementación, pero también debe estar amparado por la socialización de las normas que rigen este tipo de mercados y promover, desde la academia y organizaciones involucradas, que en el marco de la cultura financiera se permita el acercamiento con el conocimiento de las leyes y normas existentes, considerando que resultan útiles en las prácticas comunes de la población en general.

Los títulos valores electrónicos hacen parte de la evolución económica, financiera, comercial, bursátil y mercantil del país, y su eficacia ha demostrado que son instrumentos que gozan de plena seguridad jurídica y respaldo institucional para seguir su consolidación en los intercambios locales y globales, no desaparecerán del mundo de los negocios y al contrario, han llegado para fomentar confianza inversionista, ello conduce a nutrir escenarios de discusión en torno a fortalecer mecanismos novedosos de regulación e implementación de estas actividades.

Dado el aumento en las operaciones que contienen intercambios mercantiles, comerciales y de títulos valores realizados electrónicamente es primordial que desde los organismos de control se abanderen programas de información y formación en medidas contra el fraude cibernético y las actividades que pueden constituirse en ejercicios ilegales que atentan contra los sistemas.

El reto de poner en marcha el sistema REDIAN sugiere una constante retroalimentación con los empresarios y usuarios del mecanismo de implementación del registro de la factura electrónica como título valor. El aplazamiento de implementación de agosto de 2021 a enero de 2022 sumado a las múltiples resoluciones emitidas derogando los términos establecidos ha generado incertidumbre acerca de la aplicación del sistema.

Incentivar el uso de las herramientas tecnológicas en las operaciones comerciales y mercantiles fomenta el uso de la red en beneficio de realizar operaciones en tiempo real desde la comodidad y seguridad de un espacio adecuado, pero también reduce las emisiones de documentos físicos y desincentiva el uso de papel como fuente de soporte legal. La masificación de este tipo de actividades hace su aporte de cuidado al medio ambiente.

Referencias

- AMV. (2020). *Guía de mercados: renta fija, renta variable y derivados*. Bogotá D.C.: Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia. Obtenido de <https://www.amvcolombia.org.co/wp-content/uploads/2021/08/Guia-Mercados-Asesor-Financiero.pdf>
- Arango, R. (2005). *El concepto de Derechos Sociales Fundamentales*. Bogotá D.C. : Editorial Legis.
- Artículo 2 Ley 527. (1999). *Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones*. Bogotá D.C.: Congreso de la República. Obtenido de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0527_1999.html
- Artículo 619. (1971). *Decreto 410. De Los Títulos Valores*. Bogotá D.C.: Presidencia de la República. Obtenido de <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=41102>
- Artículo 709. (1971). *Decreto 410. Requisitos del pagaré*. Bogotá D.C.: Presidencia de la República. Obtenido de <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=41102>
- Artículo 752. (1971). *Decreto 410. Definición de Bonos*. Bogotá D.C.: Presidencia de la República.
- Artículo 753. (1971). *Decreto 410. Títulos representativos de bonos*. Bogotá D.C.: Presidencia de la República.

Artículo 757. (1971). *Decreto 410. Expedición de certificados de depósito y bonos de prenda.*

Bogotá. D.C.: Presidencia de la República.

Artículo 767. (1971). *Decreto 410. Características de la carta de porte y conocimiento de*

embarque. Bogotá D.C.: Presidencia de la República.

Artículo 772. (1971). *Decreto 410. Facturas cambiarias.* Bogotá D.C.: Presidencia de la

República. Obtenido de

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=41102>

Artículo 780. (1971). *Decreto 410. Acciones.* Bogotá D.C.: Presidencia de la República.

Obtenido de

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=41102>

Artículo 771. (1971). *Decreto 410. Aplicación de normas de la letra y pagaré a la carta e porte y*

conocimiento de embarque. Bogotá D.C.: Presidencia de la República.

ASOBANCARIA. (2017). Títulos valores electrónicos: una innovación necesaria en el país.

Semana Económica, 1-11. Obtenido de <http://marketing.asobancaria.com/hubfs/Semanas-Economicas/1082.pdf>

Becerra, H. (2006). *Derecho Comercial de los Títulos Valores.* Bogotá D.C.: Ediciones Doctrina y Ley Ltda.

Bernal, C. (2010). *Metodología de la investigación: administración, economía, humanidades y ciencias sociales.* Bogotá D.C.: Prentice Hall.

Botero, J. (2014). *El título valor electrónico en la legislación colombiana.* Medellín: Ed. Jurídica Diké.

Brunner, J. (1973). *Derecho Comercial: Títulos Valores Crediticios.* Buenos Aires: Tipografía Editora Argentina.

- Bueno, F. (2014). *Prueba electrónica y proceso 2.0: especial referencia al proceso civil*. Valencia: Tirant lo blanch.
- BVC. (2021). *Acciones: mercado de renta variable*. Bogotá D.C.: Bolsa de valores de Colombia. Obtenido de <https://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Mercados/descripciongeneral/acciones?action=dummy>
- Carvajal, R. (2008). *Títulos valores: título valor tradicional y título valor electrónico*. Medellín: Librería Señal Editora.
- Castro, L. (2019). ¿Qué son las acciones? Significado. *Rankia publicación*, 3-6. Obtenido de <https://www.rankia.co/blog/analisis-colcap/3513621-que-son-acciones-significado-tipos-precio>
- China Briefing. (2013). Marco Legal del E-Commerce en China. *Dezan Shira & Associates*, 4-6. Obtenido de <https://www.china-briefing.com/news/marco-legal-del-e-commerce-en-china/>
- CNUDMI. (2001). *Ley Modelo Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional*. New York: Comunicados. Obtenido de https://uncitral.un.org/es/texts/ecommerce/modellaw/electronic_signatures
- Decreto 1349. (2016). *Referente a la circulación de la factura electrónica como título valor*. Bogotá D.C.: Presidencia de la República. Obtenido de <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=75854>
- Decreto 1625. (2016). *Decreto único reglamentario en materia tributaria*. Bogotá D.C.: Presidencia de la República. Obtenido de <https://www.dian.gov.co/Prensa/HistoricoNovedades/Decreto%201625%20de%202016,%20Decreto%20C3%9Anico%20Reglamentario%20en%20Materia%20Tributaria.pdf>

Decreto 1929. (2007). *Por el cual se reglamenta el artículo 616-1 del Estatuto Tributario.*

Bogotá D.C.: Presidencia de la República. Obtenido de

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25311>

Decreto 2242. (2015). *Por el cual se reglamentan las condiciones de expedición e*

interoperabilidad de la factura electrónica con fines de masificación y control fiscal.

Bogotá D.C.: Presidencia de la República. Obtenido de

<http://www.suin.gov.co/viewDocument.asp?id=30033048>

Decreto 2555. (2010). *Por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector*

financiero, asegurador y del mercado de valores. Bogotá D.C.: Presidencia de la

República. Obtenido de

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=40032>

Decreto 410. (1971). *Código de Comercio de Colombia.* Bogotá D.C.: Presidencia de la

República.

Decreto N° 10.271. (2020). *Dispõe sobre a proteção dos consumidores nas operações de*

comércio eletrônico. Brasília: Presidente da República. Obtenido de

<https://www.in.gov.br/web/dou/-/decreto-n-10.271-de-6-de-marco-de-2020-246772854>

Díaz, D. (2010). *El título valor electrónico en Colombia.* Bogotá D.C.: Universidad Libre.

Directiva 1999/93/CE. (1999). *Por la que se establece un marco común para la firma*

electrónica. Bruselas: Parlamento Europeo y del Consejo. Obtenido de [https://eur-](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/LSU/?uri=CELEX:31999L0093)

[lex.europa.eu/legal-content/ES/LSU/?uri=CELEX:31999L0093](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/LSU/?uri=CELEX:31999L0093)

ESIGN. (2000). *Electronic Signatures in Global and National Commerce Act.* Washington D.C.:

U.S. Congress. Obtenido de [https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-](https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-106publ229/pdf/PLAW-106publ229.pdf)

[106publ229/pdf/PLAW-106publ229.pdf](https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-106publ229/pdf/PLAW-106publ229.pdf)

- Gaitán, J. (2019). *Lecciones sobre títulos-valores (1 ed.)*. Bogotá D.C.: Ed. Universidad del Rosario.
- García, A. (2001). *La gestión de documentos electrónicos como respuesta a las nuevas condiciones del entorno de información*. La Habana: Acimed.
- García, J. (2008). *Títulos valores: régimen global*. Bogotá D.C.: Ed. Temis.
- Giraldo, A. (2007). *Metodología y técnica de la investigación jurídica*. Bogotá D.C.: Librería Ediciones del Profesional Ltda.
- Gómez, S. (2016). *Validez probatoria del título valor electrónico en Colombia*. Bogotá D.C.: Univerdidad La Gran Colombia.
- Guzmán, A. (2019). Títulos valores electrónicos, una verdad palpable. *Fintech Colombia*, 6-7.
- Hincapié, M. (2014). *Títulos Valores*. Medellín: Sello Editorial.
- Illescas, R. (2016). *Electronificación de los títulos valores*. Navarra: Thomson Reuters.
- Jiménez, E. (2020). *La factura electrónica como título - valor en el ordenamiento jurídico colombiano*. Rionegro: Universidad Católica.
- Kelsen, H. (1960). *Teoría pura del derecho*. Buenos Aires: Ed. Universidad de Buenos Aires.
- Leal, H. (2006). *Títulos valores: partes general, especial procedimental y práctica*. Bogotá D.C.: Leyer.
- Ley 1231. (2008). *Por la cual se unifica la factura como título valor*. Bogotá D.C.: Congreso de la República. Obtenido de http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1231_2008.html
- Ley 1753. (2015). *Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018*. Bogotá D.C.: Congreso de la República.

- Ley 19.799. (2002). *Sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma*. Santiago: Honorable Congreso Nacional. Obtenido de <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=196640>
- Ley 1943. (2018). *Por la cual se expiden normas de financiamiento*. Bogotá D.C.: Congreso de la República. Obtenido de http://secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1943_2018.html
- Ley 20.219. (2007). *Destina recursos para el fondo de desarrollo de la región de Magallanes y de la Antártica chilena y modifica otros cuerpos legales que indica*. Santiago: Honorable Congreso Nacional. Obtenido de <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=265227>
- Ley 25.506. (2001). *Firma Digital*. Buenos Aires: Honorable Congreso de la Nación Argentina. Obtenido de <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-25506-70749/texto>
- Ley 527. (1999). *Aplicación de los requisitos jurídicos de los mensajes de datos*. Bogotá D.C.: Congreso de la República. Obtenido de http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0527_1999.html
- Ley 964. (2005). *Del concepto de valor y de las actividades del mercado de valores*. Bogotá D.C.: Congreso de la República. Obtenido de http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0964_2005.html
- Ley N° 27287. (2000). *Ley de Títulos Valores*. Lima: Congreso de la República. Obtenido de <https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27287.pdf>
- Marroquín, S. (2005). Sistema general de títulos valores en la República de Colombia. *Estudio régimen legal colombiano Bancoldex*, 1-33. Obtenido de https://www.bancoldex.com/sites/default/files/266_4capitulo_ii_titulos_valores.pdf

- Martínez, V. (2020). *Los títulos valores electrónicos: una realidad tan palpable como inquietante en el ordenamiento jurídico colombiano*. Bogotá D.C.: Ed. Universidad del Rosario.
- Mayorga, P. (2019). Los títulos-valores electrónicos en el ordenamiento jurídico colombiano. *Revista academia y derecho*, 157-194.
- Merchán, C. (2017). *Guía para la gestión de documentos y expedientes electrónicos*. Bogotá D.C.: Prensa Mintic. Obtenido de https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-61594_recurso_pdf.pdf
- Otálora, C. (2007). *Inexistencia del título valor electrónico*. Bogotá D.C.: Librería ediciones del profesional Ltda.
- Parra, J. (2009). *Manual de derecho probatorio*. Bogotá D.C.: Ediciones del profesional.
- Pavone, L. (1982). *La letra de cambio*. Buenos Aires: Ed. Abeledo Perrot.
- Paz, C. (2007). *Estudio doctrinal y jurisprudencial del proceso civil*. Bogotá D.C.: Ecoe ediciones.
- Pena, L. (1992). *Curso de Títulos Valores*. Bogotá D.C.: Editorial Temis.
- Peña, L. (2011). *De los títulos-valores y de los valores en el contexto digital*. Bogotá D.C.: Editorial Temis.
- Posner, R. (2007). *El análisis económico del derecho*. Ciudad de México: Fondo de cultura económica.
- PROCOLOMBIA. (2020). Comercio electrónico en China. *E-commerce en China*, 4-11. Obtenido de <https://www.colombiatrade.com.co/noticias/e-commerce-en-china-2020>
- Proyecto de Ley 106. (2016). *Por medio de la cual se regula la creación, circulación, aceptación, el aval y demás actos cambiarios sobre el título valor electrónico*. Bogotá D.C.: Senado de la República. Obtenido de

- <http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/proyectos-ley/periodo-legislativo-2014-2018/2016-2017/article/106-por-medio-de-la-cual-se-regula-la-creacion-circulacion-aceptacion-el-cual-y-demas-actos-cambiaros-sobre-el-titulo-valor-electronico>
- Proyecto de Ley 253. (2017). *Por medio de la cual se regula la creación, circulación, aceptación, el aval y demás actos cambiarios sobre el título valor electrónico*. Bogotá D.C.: Cámara de Representantes. Obtenido de <http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/proyectos-ley/periodo-legislativo-2014-2018/2016-2017/article/106-por-medio-de-la-cual-se-regula-la-creacion-circulacion-aceptacion-el-cual-y-demas-actos-cambiaros-sobre-el-titulo-valor-electronico>
- Reglamento (UE) No 910/2014. (2014). *Relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE*. Bruselas: Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea. Obtenido de <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32014R0910>
- Remolina, N. (2018). ¿Por qué es bueno para Colombia que el Congreso de la República apruebe el proyecto de ley por medio del cual se regula la creación, circulación, aceptación, aval y demás actos cambiarios sobre el título valor electrónico? *Universidad de Los Andes*.
- Resolución 000042. (2020). *Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos y el registro de la factura electrónica de venta como título valor*. Bogotá D.C.: DIAN. Obtenido de <https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%20000042%20de%2005-05-2020.pdf>
- Resolución 000063. (2021). *Por la cual se modifican resoluciones de implementación sistema de registro de factura electrónica*. Bogotá D.C.: DIAN. Obtenido de

<https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%20000063%20de%2030-07-2021.pdf>

Resolución Externa No 13. (2016). *Por la cual se dictan normas sobre apoyo transitorio de liquidez del Banco de la República a los establecimientos de crédito*. Bogotá D.C.

Obtenido de

https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/reglamentacion/archivos/Bol10_Resolucion_Externa_6_2016_30_sep_2016_0.pdf

Rincon, E. (2006). *Manual de derecho de comercio electrónico y de internet*. Bogotá D.C.: Ed. Universidad del Rosario.

Rincón, E. (2008). *Aproximación jurídica a la firma digital y a los prestadores de servicios de certificación digital en la Comunidad Andina de Naciones*. Bogotá D.C.: Cámara de comercio de Bogotá.

Ruiz, J. (2003). *Manual de títulos valores*. Bogotá D.C.: Ediciones Doctrina y Ley Ltda.

Ruíz, W. (2007). Escenario y marco legal de la factura electrónica en Colombia. *Revista de Derecho privado*, 1-17.

Santos, J. (2017). Legislación vigente en materia tributaria del comercio electrónico (e-commerce) en Colombia y la necesidad de un pronunciamiento por parte del legislador. *Academia & Derecho*, 85-110. Obtenido de

<https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/academia/article/view/4332/3679>

Sentencia SU-774/14. (2014). *Sentencia de Unificación. Valor probatorio de los documentos*. Bogotá D.C.: Corte Constitucional. Obtenido de

<https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/SU774-14.htm>

Stodeur, E. (2011). *Análisis económico del derecho: una introducción*. Buenos Aires: Ed. Abeledo Perrot.

- Suescún, J. (2003). *Estudios de derecho civil y comercial contemporáneo*. Bogotá D.C.: Legis.
- Superintendencia Financiera. (2009). Sociedades por acciones simplificadas, acciones, títulos valores. *Boletín jurídico*, 9-15.
- Tafur, A. (2009). *Código civil anotado*. Bogotá D.C.: Leyer.
- Testa, E. (1996). Doctrina general de la provisión de fondos. *Revista de derecho y jurisprudencia*, 1(62), 15-19.
- Trujillo, B. (2015). *De los títulos valores. Parte general*. Bogotá D.C.: Ed. Leyer.
- UETA. (1999). *The Uniform Electronic Transactions Act*. Washington D.C.: National Conference of Commissioners on Uniform State Laws. Obtenido de <https://rightsignature.com/legalidad/ueta-act.html>
- Vega, J. (2014). *El documento jurídico y su electrificación*. Madrid: Ed, Reus.